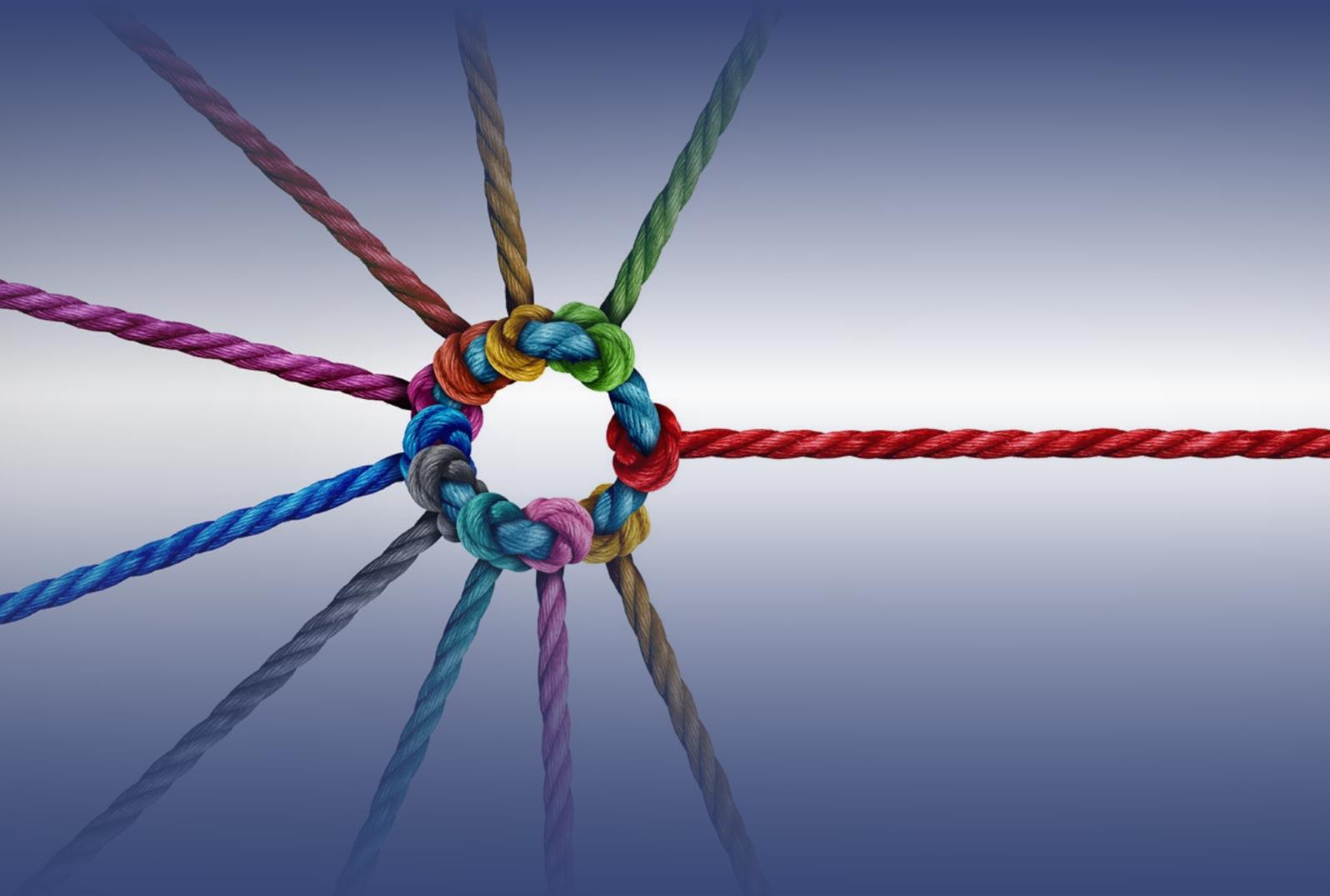




Queen Mary
University of London
Global Policy Institute



Migración, pandemia y respuestas del tercer sector: Lecciones aprendidas en Brasil e India

Autores: Parvati Nair, Marcia Vera Espinoza, Gisela P. Zapata, Smita Tiwary, Flavia R. Castro, Arsala Nizami, Nuni Jorgensen, Abhishek Yadav, Ekta Oza, Feroz Khan, Rakesh Ranjan, Benedetta Zocchi, Suyash Barve y Maria Barraco.

qmul.ac.uk/gpi

Índice

Este informe analiza los resultados del proyecto **Migración, pandemia y respuestas del tercer sector: lecciones aprendidas en Brasil e India**, financiado por el QR Strategic Priorities Fund - Research England del QMUL Global Policy Institute.

El proyecto ha sido dirigido y realizado por investigadores de la Queen Mary University of London (Queen Mary, Reino Unido), la Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG, Brasil) y el Global Research Forum on Diaspora and Transnationalism (GRFDT, India).

Autores y equipo de investigación

Profesora Parvati Nair, co-investigadora principal del proyecto, Queen Mary
Dra. Marcia Vera Espinoza, co-investigadora principal del proyecto, Queen Mary
Dra. Gisela P. Zapata, co-investigadora del proyecto, UFMG
Dra. Smiata Tiwary, co-investigadora del proyecto, GRFDT
Dra. Flavia R. Castro, investigadora asociada, UFMG
Dra. Arsala Nizami, investigadora asociada, GRFDT
Nuni Jorgensen, asistente de investigación, Queen Mary
Abhishek Yadav, investigador asociado, GRFDT
Ekta Oza, asistente de investigación, Queen Mary
Dra. Feroz Khan, investigador, GRFDT
Dr Rakesh Ranjan, investigador, GRFDT
Benedetta Zocchi, asistente de investigación, Queen Mary
Suyash Barve, investigador asociado GPI, Queen Mary
Maria Barraco, investigadora asociada GPI, Queen Mary

Comité asesor: Cyntia Sampaio, Profesora Kavita Datta, Profesor Binod Khadria y Dr. Didar Singh

Esta publicación puede descargarse en <https://www.qmul.ac.uk/gpi/projects/migpanbrin/>

Este informe está disponible en virtud de los términos de la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0.

Cita obligatoria: Nair, P., Vera Espinoza, M., Zapata, G.P., Tiwary, S., Castro F.R., Nizami, A., Jorgensen, N., Yadav, A., Oza, E., Khan, F., Ranjan, R., Zocchi, B., Barve, S., and Barraco, M. (2021) Migración, pandemia y respuestas del tercer sector: Lecciones aprendidas en Brasil e India. QMUL: Londres.



| | |
|--|-----------|
| Resumen ejecutivo | 4 |
| 1. Introducción | 5 |
| 2. Contexto | 6 |
| 2.2. Brasil | |
| 2.3. India | |
| 3. Metodología | 12 |
| 4. La sociedad civil y la migración en Brasil e India | 13 |
| 4.1 Breve historia de la sociedad civil en Brasil | |
| 4.2 Breve historia de la sociedad civil en India | |
| 5. Análisis de los hallazgos | 22 |
| 5.1 Hallazgos sobre Brasil | |
| 5.1.1 Desafíos a los que se enfrentan los migrantes durante la pandemia | |
| 5.1.2 Papel de las organizaciones de la sociedad civil: lecciones y buenas prácticas | |
| 5.1.3 Recomendaciones de política | |
| 5.2. Hallazgos sobre India | |
| 5.2.1 Desafíos a los que se enfrentan los migrantes durante la pandemia | |
| 5.2.2 Papel de las organizaciones de la sociedad civil: lecciones y buenas prácticas | |
| 5.2.3 Recomendaciones de política | |
| 6. Conclusiones | 42 |
| Anexos | 43 |
| Referencias | 45 |



Resumen ejecutivo

Este informe presenta una revisión exhaustiva y un análisis interregional del papel de las organizaciones de la sociedad civil (OSC), incluidas las ONG, las organizaciones religiosas y las dirigidas por migrantes, en la asistencia a los migrantes y refugiados en Brasil e India, en el contexto de la pandemia de la COVID-19.

Mediante entrevistas semiestructuradas con representantes de cincuenta y dos OSC de ambos países, identificamos los retos y las buenas prácticas que surgieron durante este periodo de crisis entre marzo de 2020 y febrero de 2021. Al centrarse en los actores de primera línea, el estudio proporciona información sobre el contexto, las necesidades y los riesgos que enfrentan las poblaciones migrantes, identifica las formas de asistencia puestas a su disposición por las OSC y las formas en que los gobiernos pueden apoyar la labor humanitaria de las OSC para promover la seguridad, la solidaridad, la integración y la cohesión social a largo plazo.

Conclusiones principales:

- La COVID-19 ha tenido un amplio impacto en los migrantes nacionales e internacionales en Brasil e India. Los efectos del cierre de fronteras (en Brasil) y de las restricciones a la movilidad interna (en India), así como las diversas medidas de mitigación en ambos países, han provocado un fuerte empeoramiento del bienestar personal y del nivel de vida de los migrantes.
- Los migrantes y refugiados han desarrollado, individual y colectivamente, estrategias y acciones para hacer frente a la pandemia.
- Las OSC han respondido rápidamente a los nuevos retos, asumiendo nuevas actividades para cubrir las necesidades básicas y proporcionar asistencia de emergencia.
- La pandemia provocó un aumento de la digitalización y la tecnologización del trabajo de las OSC y fomentó modos de trabajo híbridos. En algunos casos, la digitalización de los servicios amplió el alcance geográfico de las OSC mientras que, en otros, disminuyó sus capacidades debido a la falta de equipos y conocimientos en materia de nuevas tecnologías.
- Las OSC han aumentado la colaboración entre ellas, así como con organizaciones internacionales, algunos gobiernos locales y actores privados. Sin embargo, no todas las asociaciones se han traducido en fuentes de financiamiento adicionales.

Recomendaciones clave:

- Mejorar la coherencia entre las políticas y las prácticas que permitan una mejor ejecución e implementación de las políticas. Esto puede ayudar a subsanar algunas de las deficiencias en la gobernanza nacional y local de la migración que limitan la integración e inclusión de los migrantes.
- Ampliar y crear espacios de interacción entre el estado y las OSC, tanto a nivel local como nacional, así como reforzar los espacios existentes.
- Aumentar la representación y la participación de los migrantes en la toma de decisiones.
- Promover la regularización de los migrantes. En el caso de Brasil, se pide la regularización de todos los migrantes para garantizar su acceso a la protección social garantizada por el estado y facilitar la integración. En el caso de India, las OSC piden que se regularice o documente la informalidad laboral para proteger a los trabajadores migrantes.
- Reconocer aún más la profundidad y la amplitud de los conocimientos y la experiencia de las OSC para que participen como socios, junto con el gobierno, otros actores no estatales y el sector privado, en la planificación estratégica para apoyar a los migrantes y refugiados.

Introducción

La pandemia de COVID-19 ha sido una prueba de la naturaleza intensamente móvil e interconectada del mundo en el que vivimos (Guadagno 2020). Se ha extendido por los continentes donde numerosos grupos de personas móviles ya experimentaban desde hace tiempo graves vulnerabilidades (ACNUR 2017; OIM 2019).

La intensificación de las vulnerabilidades de los migrantes y la diferencia en la calidad de las respuestas regionales, nacionales y locales también han afectado profundamente a cómo se ha desarrollado la pandemia dentro de los estados (Banco Mundial 2020). En Brasil e India, dos potencias regionales emergentes que ya padecen altos niveles de desigualdad estructural (Couto Soares & Scerri 2014), muchos grupos de migrantes se han encontrado especialmente en riesgo durante la pandemia. En ambos países, los gobiernos nacionales y locales no han sido capaces de satisfacer plenamente las necesidades de los grupos vulnerables, lo que revela carencias en las políticas o en su implementación (Lotta et al. 2020; Sircar 2020). En ambos países, la rápida respuesta de la sociedad civil ha proporcionado a muchos migrantes una importante y necesaria fuente de ayuda (Vera Espinoza et al., próxima publicación; Bengochea et al. 2021; Ramachandran 2020).

Este informe presenta un análisis interregional del papel de la sociedad civil, incluidas las ONG, las organizaciones religiosas y las organizaciones dirigidas por migrantes, en la prestación de apoyo a los migrantes nacionales e internacionales en Brasil e India, en el contexto de la pandemia de COVID-19.

Brasil e India se posicionan como países en desarrollo, con democracias plurales y multiétnicas (IBSA 2020). Agrupados bajo la rúbrica BRICS, son ampliamente reconocidos como dos gigantes económicos del mundo en desarrollo, que comparten una agenda internacional de cooperación comercial y financiera (Formici 2019), y una influencia regional sustancial en sus respectivos continentes. La concentración de industrias e infraestructuras en los principales núcleos urbanos de los dos países crea incentivos socioeconómicos, atrayendo a migrantes de otros países.

Brasil es un importante destino para los migrantes regionales y extrarregionales de América Latina, incluidos bolivianos, venezolanos que huyen de la crisis económica y sociopolítica, y haitianos que migran por razones económicas y humanitarias, entre otros (Lesser et al. 2018). India está marcada por la migración interna, su diáspora mundial y también la inmigración. La migración interna constituye una parte fundamental del tejido urbano indio y “la columna vertebral de la economía india” (Bhagat 2020; Suresh & James 2020). El país también recibe grupos de migrantes indocumentados, que llegan sobre todo de los vecinos Bangladés y Nepal (Upadhyay 2008).

En ambos países, la pandemia y, sobre todo, la combinación del confinamiento y los cierres de fronteras aplicada para responder a la crisis sanitaria, introdujo nuevos retos para lo que ya eran grupos de migrantes vulnerables. En Brasil, las medidas de aislamiento físico dejaron sin empleo a miles de trabajadores migrantes precarios. Las restricciones sin precedentes a los viajes internacionales también han dado lugar a nuevas formas de inmovilidad involuntaria/forzada para los venezolanos atrapados en estados fronterizos, como Roraima, y para los paraguayos varados en el puente que conecta los dos países (Vera Espinoza et al. 2020). En India, el anuncio de confinamiento, el 23 de marzo de 2020, desencadenó un movimiento masivo de mano de obra migrante desde los núcleos urbanos hacia localidades más pequeñas y zonas rurales y, el retorno masivo de trabajadores indios del extranjero, que se habían quedado sin trabajo y sin recursos. En el noreste, los migrantes indocumentados se encontraron atrapados, sin ingresos ni ayudas, y también sin poder regresar a sus hogares (Nair & Vera Espinoza 2021).

Además de los retos que plantea la pandemia, los gobiernos de ambos países estaban muy poco preparados para hacer frente a la fragilidad de los migrantes vulnerables (Lotta et al. 2020; Sircar 2020). En ambos casos, intervino el sólido sector de la sociedad civil, a menudo en coordinación con los gobiernos locales y las organizaciones internacionales, en el desarrollo de medidas prácticas para mitigar el impacto de la pandemia y prestar apoyo inmediato a los migrantes sobre el terreno.

¿A qué retos específicos se han enfrentado los migrantes vulnerables en India y Brasil desde el estallido de la pandemia de COVID-19? ¿Qué formas de asistencia han estado disponibles para ellos desde el tercer sector? ¿De qué manera ha tenido que adaptar la sociedad civil su trabajo para atender las necesidades de los migrantes durante la pandemia? ¿Qué pueden aprender los responsables políticos de las buenas prácticas del tercer sector que se están desarrollando en los diversos espectros sociales de Brasil e India? ¿Cómo pueden comprometerse los gobiernos con el tercer sector para apoyar y ampliar su labor humanitaria? Este estudio aborda estas cuestiones.

2. Contexto

2.1 Brasil

Brasil fue el primer país de América Latina en reportar un caso de COVID-19 el 26 de febrero de 2020. En un año, el país ha registrado casi 10 millones de casos y más de 290 000 muertes según la Organización Mundial de la Salud (OMS 2021).

Brasil es el único país del mundo con una población de más de 212 millones de habitantes (IBGE 2021) que cuenta con un sistema de salud gratuito, universal e integral (OPS 2017). Este hecho, junto con una historia reciente de lucha contra las epidemias, colocó a Brasil en una posición privilegiada para iniciar la lucha contra el virus con importantes ventajas en comparación con otros países latinoamericanos. Sin embargo, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, implementó lo que se ha denominado como una “estrategia institucional para la diseminación del virus” (Brum 2021), lo que contribuyó a colocar al país en el primer lugar de las tasas de contagio y muertes. En este contexto, las poblaciones de migrantes y refugiados fueron de las más afectadas por la pandemia, dada su precaria incorporación socioeconómica a la sociedad (Zapata & Prieto Rosas 2020).

Las tendencias y patrones migratorios en Brasil han sufrido importantes cambios desde la crisis económica mundial de 2008. Aunque el país ha sido generalmente reconocido como un punto de origen más que un destino de los migrantes internacionales desde la década de 1980, la última década se ha caracterizado por el aumento en los índices de inmigración internacional (Fernandes 2015; de Oliveira 2013). Los datos del censo de 2010 sugieren que el 22,14 % de los ciudadanos nacidos en el extranjero que viven en Brasil proceden de otros países sudamericanos: principalmente bolivianos y paraguayos, seguidos de argentinos y uruguayos (Fernandes 2015). El censo de 2010, sin embargo, no recogió algunas de las tendencias migratorias más importantes que están teniendo lugar en Brasil en los últimos años: la llegada de nacionales de Haití a partir de 2010 y de venezolanos, especialmente, desde finales de 2016.

Entre 2010 y 2015, se estima que 85.079 nacionales haitianos entraron en el país, principalmente gracias a visados de residencia humanitaria o como solicitantes de asilo. Esta población era predominantemente masculina y joven: el 73,9 % eran hombres y pertenecían al grupo de edad de entre 20 y 34 años (Baeninger & Peres 2017). En cuanto a los venezolanos, al menos 223.163 entraron formalmente en el país en 2019 y otros 66 956 lo hicieron en 2020. Para agosto de 2020, Brasil había sido elogiado internacionalmente por extender protección internacional a 46 000 venezolanos, convirtiéndose así en el país con el mayor número de refugiados venezolanos en América Latina (ACNUR 2020a). La mayoría de los venezolanos en Brasil son adultos jóvenes, y el flujo migratorio está

bastante equilibrado en cuestión de género (Cavalcanti & de Oliveira 2020). Además de los haitianos, los venezolanos y los migrantes de Mercosur, Brasil también ha recibido a migrantes y solicitantes de asilo extrarregionales en los últimos diez años, en parte como consecuencia de iniciativas de reasentamiento solidario, procedentes de países como Siria, Palestina, Senegal y la República Democrática del Congo (Vera Espinoza 2018).

En 1997, Brasil aprobó la Ley de Refugiados (Ley 9.474), incorporando así a la legislación nacional la Convención de Refugiados de 1951 y algunos elementos de la Declaración de Cartagena, y constituyendo el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE). El artículo 196 de la constitución brasileña establece el acceso universal a la salud, independientemente de la situación migratoria, y la Nueva Ley de Migración de Brasil, 13.445/2017, se centra en la protección de los derechos de los migrantes. Garantiza “el acceso igualitario y gratuito de los migrantes a los servicios, programas y prestaciones sociales, bienes públicos, educación, asistencia jurídica pública integral, trabajo, vivienda, servicios bancarios y seguridad social” (Brasil 2017: artículo 3, apartado XI). Además, Brasil ha firmado compromisos a nivel internacional para la protección y el respeto de los derechos de los migrantes. Entre ellos, el Pacto Mundial para los Refugiados de la ONU y los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030. Brasil también tuvo un papel activo en las negociaciones del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular que el país firmó (Waltrick 2019), pero del que el presidente Bolsonaro se retiró al asumir el poder en 2019.

En 2018, Brasil también implementó una respuesta particular para gestionar el flujo de migrantes y refugiados venezolanos: la Operación Acogida (Operação Acolhida). La operación está coordinada por los militares y apoyada por la ONU y organizaciones de la sociedad civil. Es la primera misión de carácter humanitario emprendida por las Fuerzas Armadas en territorio brasileño. La operación se estructura en torno a tres frentes: “el ordenamiento de la frontera”, es decir, la admisión y regularización ordenada de los venezolanos; “la acogida/refugio”, relacionada con la provisión de refugio, alimentos y servicios de salud; y “la interiorización”, un programa de reubicación voluntaria de venezolanos desde la frontera hacia otros estados brasileños (Zapata & Tapia, próxima publicación). Así, la Operación Acogida ha supuesto la construcción de una compleja infraestructura humanitaria normativa y material en el país (Moulin & Magalhaes 2020).



Con el estallido de la pandemia en marzo de 2020, el gobierno implementó una serie de ordenanzas (portarias) para restringir la entrada de extranjeros al país. En marzo, cerró las fronteras del país, suspendiendo así la entrada de no nacionales por tierra, mar, y aire (Governo do Brasil 2020). Sin embargo, se ha manifestado preocupación sobre los precedentes que sientan estos instrumentos y sus posibles consecuencias a largo plazo para la gestión de la movilidad en el país. Por un lado, estas portarias facilitan la denegación de entrada, la repatriación y la deportación sumaria de personas que buscan refugio o necesitan protección humanitaria, así como la imposición de cargos civiles, administrativos y penales a los “infractores”. Por otra parte, el lenguaje de estos nuevos instrumentos revive los valores centrados en la seguridad de las antiguas leyes, al tiempo que no hace ninguna excepción en el cumplimiento de los compromisos de protección internacional de Brasil.

El cierre de fronteras, junto con otras medidas destinadas a frenar el virus, tuvo un impacto desproporcionado en la población migrante en Brasil, dado que una parte importante de ella trabaja en el sector informal (Bengochea et al. 2021; Zapata & Prieto Rosas 2020). Además, el estado no ha implementado ninguna medida específica para ayudar a los migrantes y refugiados a mitigar los efectos de la pandemia y muchos han tenido dificultades para acceder a los programas de protección social porque carecen de la documentación necesaria (Vera Espinoza et al., próxima publicación).

No obstante, algunas entidades han colaborado con actores internacionales y la sociedad civil para ayudar a los migrantes desde el inicio de la pandemia. Por ejemplo, el gobierno municipal de São Paulo distribuyó 200 canastas de alimentos, desinfectantes y mascarillas (Governo do Estado de São Paulo 2020), y la sociedad civil donó alimentos para ayudar a los refugiados en la región del Amazonas (Governo do Estado do Amazonas 2020). Otra medida positiva adoptada por Brasil fue la prórroga automática de los documentos migratorios (ACNUR 2020b), determinando que la documentación vencida emitida por la Policía Federal se consideraría válida hasta el 16 de marzo de 2021 (BAL Global 2020). Sin embargo, uno de los principales problemas en Brasil gira en torno a los migrantes irregulares, que aunque están protegidos por la ley, se enfrentan a una serie de obstáculos burocráticos para ejercer sus derechos y se ven obligados a depender de la asistencia que prestan las OSC (Cornali 2020). El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) también ha ayudado a Brasil a crear refugios para migrantes en Roraima y otros lugares clave, ha proporcionado kits de higiene y ha llevado a cabo campañas de prevención de la COVID-19 en español y en lenguas indígenas a través de las redes sociales (Huguene & Godinho 2020). Además, la Organización Internacional para las Migraciones (OIM) ha seguido asistiendo y reubicando a los venezolanos residentes en Brasil durante la pandemia (OIM 2020), y también ha establecido Unidades Móviles de Salud en el estado de Roraima (EEAS 2020).

2. Contexto

2.2 India

Un año después de notificar su primer caso de COVID-19 en enero de 2020 (Reid 2020), se han producido 160.692 muertes relacionadas con la COVID en India (hasta el 25 de marzo de 2021) (OMS 2021).

Tal y como preveían varios estudios, los casos confirmados de COVID-19 en India siguen siendo muy elevados (a la par que Estados Unidos). Sin embargo, los casos de fallecimientos relacionados con la COVID-19 notificados en India han sido menores que en otros países (Chatterjee 2020).

La migración ocupa un importante lugar en la historia social de India (Tumbe 2018). A grandes rasgos, en la actualidad, el contexto indio se caracteriza por tres tipos de migración: la migración interna a los principales centros urbanos, así como entre zonas rurales; la migración laboral de indios calificados y no calificados a diversas partes del mundo, especialmente al Golfo; y la presencia de migrantes y refugiados internacionales en India procedentes de los países vecinos. Todas las OSC confirman que el repentino anuncio de confinamiento para frenar la propagación de la COVID-19 el 23 de marzo de 2020 tuvo un impacto inmediato en los tres grupos, desatando la mayor migración en el subcontinente desde la Partición.

La mano de obra migrante que permanece relegada a la informalidad ha sido durante mucho tiempo un aspecto clave, aunque muy poco reconocido, de la India moderna. Según un informe de la OIT (2019), "... India es un caso atípico entre los países de renta media-baja en este sentido, al tener más del 90 % de toda la mano de obra un carácter informal (definida como la que no tiene ningún seguro social), así como el 85 % de la mano de obra no agrícola. Aunque India es una de las grandes economías de más rápido crecimiento del mundo, la incidencia de la informalidad se ha mantenido en este nivel durante décadas" (Mehrotra 2019). Un factor clave en este caso es la falta de documentación de los trabajadores de otros estados del país, combinada con las prácticas de contratación informal de los contratistas, por lo que existen grandes lagunas en los datos como consecuencia. No obstante, las estimaciones aproximadas, según el censo de 2011, indican que 450 millones de la población india, de aproximadamente 1.3 billón de personas, son migrantes internos (Statista 2020). De hecho, cabe destacar que la transición económica del país de la agricultura a la industria es un proceso que todavía no ha regulado la mano de obra, por lo que la mayoría de estos migrantes siguen siendo invisibles e ilocalizables (Bremann 2008).

Esta mano de obra de los migrantes internos en los sectores informales es un importante contribuyente a la economía. Los trabajadores de las fábricas, la ayuda doméstica, los

tiradores de rickshaw (carritos de transporte de personas) y los vendedores ambulantes, entre otros, constituyen una gran parte de la mano de obra poco calificada del país. A pesar de las largas jornadas de trabajo, las condiciones laborales precarias y las profesiones mal remuneradas, el aporte de este sector informal al crecimiento económico del país es muy importante, pero también muy poco reconocido. Las grandes ciudades de India, junto con el sector industrial del país, dependen en gran medida de esta mano de obra originaria de las zonas rurales del país y, a menudo, de estados que se encuentran en otras zonas menos desarrolladas del país. El confinamiento desató una crisis entre la mano de obra migrante que puso de manifiesto las antiguas desigualdades estructurales, muy anteriores a la pandemia.

Los trabajadores indios en el Golfo constituyen una parte sustancial de los flujos de emigración desde India. En su mayoría semicalificados o no calificados, su número asciende a unos 8,5 millones (Pethiyagoda 2017). Los retos que planteó la pandemia se vieron agravados por las leyes de los estados del Golfo que restringieron su regreso, al tiempo que los empleadores los dejaron sin trabajo. Puede que estos trabajadores ya se enfrentaran a numerosos retos, pero sus remesas llevan mucho tiempo contribuyendo al desarrollo de sus regiones de origen en India (Sahoo 2015). La pandemia ha cambiado radicalmente sus perspectivas y las de sus familias. Los migrantes indios en el Golfo se enfrentan a retos adicionales para su repatriación.

El 23 de marzo de 2020, India se unió a la creciente lista de países que anunciaron un confinamiento nacional (BBC News 2020). Las medidas de contención a las que recurrió el gobierno no tenían precedentes en cuanto a las restricciones a la movilidad de las personas, el cierre de las rutas de transporte nacionales (incluidos los trenes de larga distancia) y el cierre de las fronteras estatales y nacionales (Press Information Bureau of India 2020). Además, el gobierno central, seguido por los gobiernos regionales de los estados, aplicó la Ley de Enfermedades Epidémicas de la época colonial (1897) ante la ausencia de una legislación para abordar específicamente las emergencias de salud pública (Goyal, 2020). (Goyal, 2020).

Esta ley otorgaba a las autoridades policiales el poder de llevar a cabo operaciones de búsqueda de los sospechosos de ser portadores del virus, poner en cuarentena a los infectados en instalaciones estatales y sancionar a los que infringieran la cuarentena. El confinamiento y el cierre de empresas



dejaron sin trabajo y en la indigencia a miles de trabajadores en ciudades como Nueva Delhi, Bangalore y Bombay de la noche a la mañana. Los trabajadores contratados para trabajar en proyectos de infraestructuras estatales, por ejemplo, fueron abandonados a su suerte por las empresas privadas que los habían contratado (Maraa Collective 2020). Muchos trabajadores carecían de los medios necesarios para seguir viviendo en las ciudades. Con los servicios regulares de los autobuses interestatales y los trenes de larga distancia suspendidos indefinidamente, muchos empezaron a caminar de vuelta a casa (Khadria 2020). Esta migración masiva a lo largo de miles de kilómetros tuvo lugar en el implacable apogeo del verano (Nair, 2020). Las estrictas medidas de confinamiento se vieron exacerbadas por los castigos corporales que las autoridades impusieron a quienes infringían las normas de cuarentena (BBC News 2020b), y los trabajadores de las castas bajas que regresaban a casa solían ser el blanco de los ataques (Ganguly 2020). La ausencia de una comunicación clara y eficaz sobre las medidas de cuarentena obstaculizó la labor de las autoridades policiales, que en ocasiones no podían diferenciar entre los que infringían la ley de forma irresponsable y los que simplemente no tenían otra opción (Kikon 2020).

En Assam, un estado fronterizo con Bangladesh en el noreste del país, una controvertida ley que concedía la ciudadanía a los refugiados en función de su religión había entrado en vigor apenas unas semanas antes del confinamiento, en medio de airadas protestas (Sharma 2020). Si bien el confinamiento

provocó una disminución de las protestas, el retorno de los trabajadores migrantes (Leivon et al. 2020) a Assam y las tendencias migratorias inversas en los estados vecinos precipitaron un aumento de los casos de COVID-19. Las infraestructuras de salud pública, e incluso las instalaciones de análisis, estaban extremadamente subdesarrolladas en estados como Nagaland, que tuvo que enviar muestras a los laboratorios del estado vecino de Assam para su análisis. Los trabajadores de primera línea también se enfrentaron a una grave escasez de equipos de protección individual (EPI). Mientras tanto, los trabajadores migrantes del noreste de India que trabajaban en las ciudades del continente fueron objeto de amenazas y agresiones racistas por su aspecto (Haokip 2021). Los trabajadores del noreste, así como los que regresaban a estados como Bihar y Orissa (Kikon 2020), que no podían mantener el nivel de vida en la ciudad, se enfrentaron a formidables desafíos al volver a casa (Salle 2020). Los estados del noreste de India tienen un número atípicamente alto de migrantes y una vasta diáspora dispersa por todo el mundo, y muchos de ellos, que viven con permisos de trabajo en países como Emiratos Árabes Unidos (EAU), se han quedado desamparados a causa del confinamiento (Sitlhou 2020). (Sitlhou 2020).

La primera fase de la evacuación de ciudadanos indios y expatriados de vuelta a casa en el marco de la "Misión Vande Bharat" (Gobierno de India 2020) comenzó en mayo de 2020, casi dos meses después del confinamiento nacional. Para muchos trabajadores migrantes del noreste en EAU, estas

opciones no eran viables, ya que los vuelos conectaban en su mayoría con ciudades del sur de India. Muchos trabajadores migrantes perdieron sus empleos y también se les canceló el visado, por lo que se vieron expuestos a cuantiosas multas y posibles penas de prisión por permanecer en el país sin la documentación adecuada (Karasapan 2020).

No existen registros oficiales de los trabajadores migrantes que murieron o quedaron desempleados a causa de la pandemia (The Wire, 2020), pero se calcula que un total de 10 millones de trabajadores migrantes internos regresaron a sus estados de origen, con 3,2 millones de regreso a Uttar Pradesh y 1,5 millones a Bihar (Rao et al. 2020), y se calcula que en abril de 2020 habrá 122 millones de indios desempleados (Inamdar, 2020). Las organizaciones de la sociedad civil llenaron el vacío de datos recopilando y registrando información esencial sobre las condiciones de vida y de trabajo de los trabajadores migrantes abandonados a su suerte en las ciudades. Algunos informes independientes afirmaron que la mayoría de los trabajadores migrantes eran trabajadores informales y trabajaban sin contrato escrito (Patel 2020).

Es evidente que el confinamiento aumentó las vulnerabilidades sociales, económicas y psicológicas de los migrantes y dejó a muchos de ellos en la indigencia: desempleados y sin acceso a remuneración alguna (Rajan et al. 2020). Desde el principio de la crisis, una parte esencial del trabajo de la sociedad civil fue la distribución de la ayuda y la coordinación con los grupos dirigidos por migrantes, así como con otras organizaciones humanitarias, grupos religiosos y departamentos gubernamentales interesados (Youngs 2020). Las organizaciones de la sociedad civil tuvieron que sortear numerosos retos, como la recaudación de fondos o donaciones para sus programas de ayuda y la obtención de permisos para que los trabajadores humanitarios pudieran distribuir la ayuda. Las donaciones de fuentes privadas y la ayuda voluntaria se hicieron indispensables. En el All India Institute for Medical Sciences (AIIMS) se creó una nueva red de médicos que donaron fondos y alimentos, además de los conductores de carritos rickshaw que transportaron a los cooperantes de forma gratuita. Estas notables alianzas, a veces intermediadas por organismos multilaterales de desarrollo (Ramachandran 2020), en todo el espectro socioeconómico, ayudaron en una serie de labores de socorro, desde la distribución de raciones de alimentos hasta la asistencia a los indigentes para que accedieran a la ayuda financiera de los bancos y las oficinas de correos, pasando por la organización del transporte con la ayuda de los funcionarios del gobierno para repatriar a los trabajadores.



3. Metodología

Este informe se basa en 52 entrevistas cualitativas semiestructuradas con Organizaciones de la Sociedad Civil (OSC) que trabajan con migrantes y refugiados en Brasil (25 entrevistas) y en India (27 entrevistas), realizadas en febrero y marzo de 2021.

Incluimos tres grupos principales de actores de la sociedad civil en ambos países, sobre la base de un muestreo intencional: 1) Organizaciones no gubernamentales (ONG); 2) organizaciones religiosas y 3) organizaciones dirigidas por migrantes.

Para el muestreo, dividimos a los países en sus divisiones geográfico-políticas regionales y luego hicimos un seguimiento de todas las OSC que trabajan con migrantes y refugiados en cada país (véase el Anexo 1). Intentamos mantener cierto equilibrio entre el número de organizaciones entrevistadas para cada grupo en cada región, a pesar de las limitaciones impuestas por la concentración de algunas organizaciones en zonas específicas. Sin embargo, en India la muestra se vio limitada por el hecho de que las entidades con sede en el noreste del país decidieron no participar en este estudio.

Se empleó un instrumento común para la recogida de datos en ambos países. Las entrevistas tenían como objetivo comprender: i) los retos a los que se enfrentan los migrantes en Brasil e India desde el estallido de la pandemia de COVID-19; ii) la asistencia de que disponen por parte de las OSC; iii) las buenas prácticas y las carencias; iv) las nuevas asociaciones que surgieron durante la pandemia y v) las percepciones sobre cómo los gobiernos pueden comprometerse con el tercer sector para apoyar su trabajo (véase el Anexo 2).

Todas las entrevistas se realizaron en línea o por teléfono. Los datos de las entrevistas se analizaron y sistematizaron mediante un instrumento común. El material de las entrevistas se ha anonimizado, para proteger la confidencialidad de nuestras fuentes, aunque especificamos el tipo de organización y la ubicación geográfica, ya que esta información es relevante para entender los diferentes problemas y perspectivas de los actores en ambos países.

La investigación fue aprobada por los Comités de Ética de Queen Mary University of London (QMERC20.124) y por la Universidad Federal de Minas Gerais (CAAE: 44923521.5.0000.5149).

4. La sociedad civil y la migración en Brasil e India

4.1 Breve historia de la sociedad civil en Brasil

Si bien académicos y activistas han cuestionado su carácter verdaderamente participativo, la Constitución Ciudadana (Constituição Cidadã), el conjunto de principios políticos de Brasil, fue promulgada en 1988.

Tras más de dos décadas de dictadura militar, caracterizada por la feroz represión de los movimientos sociales y de la disidencia política, la población pudo contribuir activa y formalmente al diseño de las instituciones democráticas. Dos acontecimientos paralelos son clave para entender el papel de la sociedad civil brasileña a partir de entonces. En primer lugar, la nueva constitución se desarrolló en parte a través de enmiendas populares, lo que permitió a diversos sectores de la sociedad apoyar la elaboración de la nueva legislación nacional, regional y municipal. En segundo lugar, la constitución estableció una serie de mecanismos a través de los cuales la sociedad civil podía participar directamente en la gestión pública (Rocha 2008). A través de la creación de consejos populares, hoy la mayoría de las áreas de la administración pública tienen espacios institucionalizados de participación social (Avritzer 2007; Rocha 2008). Como se analizará más adelante, la recepción e integración de migrantes y refugiados en Brasil no es una excepción a este patrón.

Esto no quiere decir que la participación política popular haya comenzado en Brasil solo después de 1988, ni que el papel activo de la sociedad civil en el proceso de redemocratización haya surgido sin dificultades. Desde finales de los años sesenta hasta los ochenta, en plena represión del régimen militar, surgieron en el país varios movimientos sociales, como el Movimiento de los Trabajadores Sin Tierra (MST), la Unión Nacional de Estudiantes (UNE), la Central Única de Trabajadores (CUT) y una serie de organizaciones vinculadas a una vertiente progresista de la Iglesia católica, llamada Teología de la Liberación (Rocha 2008). Fue también en esta época, en 1966, cuando la organización católica Caritas Arquidiocesana se independizó de su organización hermana internacional y se constituyó como una entidad nacional autónoma con sede en varias ciudades de Brasil.

A finales de la década de 1970, en medio del recrudecimiento de la violencia infligida por las dictaduras militares en Chile y Uruguay, los exiliados políticos comenzaron a huir a Brasil, especialmente a Río de Janeiro. De forma autónoma o con la ayuda de una red de instituciones católicas en América Latina,

estos grupos se pusieron en contacto con la oficina de Caritas en Río de Janeiro para solicitar protección. La organización se convirtió así, poco a poco, en un refugio seguro para quienes escapaban de la persecución política en la región, aunque ello supusiera el riesgo de sufrir represalias por parte del régimen militar brasileño. Presionada por estas nuevas demandas, y con el apoyo de la Confederación Nacional de Obispos de Brasil (CNBB), Caritas inició un movimiento para traer una representación del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR) al país (Campanholo 2019). Como bien han argumentado algunos académicos, fue precisamente la ausencia del estado en ese momento, sumada al trabajo que ya realizaban las OSC brasileñas con los exiliados latinoamericanos, lo que fomentó la fuerte conexión entre las ONG y la recién inaugurada oficina de ACNUR en Río de Janeiro en 1977 (Fischel & Marcolini 2002; Jatobá & Martuscelli 2018; Moreira 2010). De hecho, podría decirse que el establecimiento de la agencia de la ONU en Brasil se produjo en gran medida gracias a la acción de las organizaciones no gubernamentales.

Así, desde la década de 1970, la sociedad civil brasileña ha participado en la defensa de los derechos de las poblaciones de migrantes y refugiados en el país en al menos tres frentes: a través de la defensa de la modernización del régimen nacional de migración/movilidad; apoyando directamente la recepción y reubicación de los migrantes y refugiados; y ayudando al proceso de integración local, ya sea de forma autónoma, o en asociación con el gobierno y ACNUR.

En Brasil, el actual marco normativo que rige las asociaciones entre las OSC y el estado se implementó en 2014 (Ley 13.019). Esta ley dispuso reglas más claras de colaboración entre el sector público y el tercer sector, con un enfoque en la transparencia del gasto público, y también creó incentivos fiscales para que las empresas privadas financien a las OSC que trabajan en sectores específicos como las actividades culturales y artísticas, el deporte, y los niños y adolescentes, entre otros (Pannunzio 2013). A diferencia de India, la ley brasileña no regula el financiamiento internacional (véase el apartado 4.2).



Defensa de la sociedad civil para la legislación basada en los derechos de los refugiados

Durante la mayor parte de la historia reciente de Brasil, desde 1980 hasta 2017, la ley que regulaba la movilidad en el país había sido diseñada en gran medida desde el punto de vista de la seguridad. Redactado durante la dictadura, el Estatuto de Extranjería encarnaba el temor de los militares a las influencias disidentes del exterior, en particular, las procedentes de los estados latinoamericanos vecinos (Machado 2020; Milesi & de Andrade 2017; Moreira 2010). Las décadas de 1970 y 1980 fueron un periodo de relativamente poca inmigración a Brasil, aunque esta época también marcó el inicio de la emigración de brasileños, principalmente hacia Estados Unidos (Acosta 2018; Zapata & Fazito 2018; Margolis 2013). Más allá de su política migratoria restrictiva, el país no contaba con un marco nacional de protección a los refugiados, y los exiliados políticos que llegaron durante este periodo encontraron poca protección legal.

Al principio de la recién constituida república, varias organizaciones de la sociedad civil empezaron a movilizarse por la aplicación de la Convención de Refugiados de 1951 y su Protocolo y la eliminación de sus cláusulas geográficas, aunque Brasil había firmado los acuerdos, en 1960 y 1967 respectivamente, solo concedía protección especial a los que huían de Europa (Jatobá & Martuscelli 2018; Milesi & de Andrade 2017). Hacia 1996, la sociedad civil había logrado asumir un papel activo en el proyecto de lo que sería la Ley Nacional de Refugiados. Las estrategias utilizadas para ello incluyeron cartas abiertas al Ministerio de Justicia; una intensa participación en las audiencias públicas; y el seguimiento cercano de los procedimientos legales en el parlamento nacional (Milesi & de Andrade 2017). A ello contribuyó también el diálogo con otras organizaciones de América Latina, a través de seminarios y encuentros regionales, en un periodo caracterizado por el intenso desplazamiento de los colombianos por el continente.

Las muestras de esa influencia en la ley aprobada en 1997 son numerosas y ayudan a explicar las características singulares del marco de protección, a menudo considerado como uno de los más progresistas de la región (Jatobá & Martuscelli 2018;

Jubilut 2006). Lo más importante es que la Ley de Refugiados de 1997 creó el Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), un organismo tripartito responsable de la determinación de la condición de refugiado y también de promover la integración de los refugiados (Jatobá & Martuscelli 2018; Moreira 2010). Esta institución está compuesta por representantes de varios ministerios, el Departamento de Policía Federal y un representante de una organización de la sociedad civil (dos ONG nacionales se turnan en este rol). Como destacan Jubilut y Apolinário (2008), este diseño, que no es frecuente en otros países, ayuda a equilibrar las preocupaciones del estado por la seguridad nacional con un enfoque basado en los derechos humanos.

Defensa por parte de la sociedad civil de una legislación basada en los derechos de los migrantes y del visado humanitario

Con el paso del tiempo, el ámbito de actuación de la sociedad civil en materia de movilidad creció considerablemente, al igual que su alcance geográfico. En 2004, el Instituto de Migrações e Direitos Humanos (IMDH) impulsó la creación de la Red de Solidaridad con los Migrantes y Refugiados (RedeMir), que se convertiría en una de las principales plataformas nacionales de defensa, movilización y coordinación de acciones entre las OSC (Milesi et al. 2018)

Mientras que los primeros años de la década del 2000 se caracterizaron por la inmigración intrarregional, en el 2010 se produjo la rápida llegada de un gran número de ciudadanos haitianos a las fronteras del norte de Brasil, tras el terremoto que afectó a este país ya de por sí empobrecido. Sin embargo, a diferencia de los nacionales del Mercosur y de otros países sudamericanos, este grupo no contaba con vías favorables de entrada y residencia en Brasil, ni se ajustaba a la definición clásica de refugiados. En parte porque habían accedido al país por zonas del territorio en las que el estado había estado históricamente ausente, los haitianos recibieron inicialmente muy poco apoyo de las autoridades públicas. En cambio, las organizaciones católicas de los estados de Acre y Amazonas fueron los primeros organismos en crear una estructura de acogida (Mamed 2016; da Silva 2013).

En gran medida, a través de la RedeMir, estas ONG pudieron obtener el respaldo de otras organizaciones y denunciar la omisión del estado. Junto con esta movilización, la presencia de la sociedad civil en el CONARE, como miembros con derecho a voto, y en el Consejo Nacional de Inmigración (*Conselho Nacional de Imigração - CNIg*)¹, como miembros observadores, tuvo una importancia fundamental en la aprobación de los visados humanitarios para los nacionales haitianos en 2012, permitiéndoles residir y trabajar en Brasil hasta cinco años (de Oliveira & Sampaio 2020; Fernandes & de Faria 2017).

Estos avances, que se produjeron cuando aún estaba vigente el draconiano Estatuto de Extranjería, prefiguraron el diseño y aprobación de la Ley de Migraciones de 2017, tras décadas de lucha política. Entre los fundamentos de la nueva ley se encontraban los distintos foros de debate que se habían celebrado durante los diez años anteriores, que habían reunido a movimientos sociales y organizaciones de la sociedad civil a nivel local, nacional, regional y mundial. En este sentido, merece especial atención la primera Conferencia Nacional sobre Migración y Refugio (Comigrar). Concebida como un espacio de reflexión colectiva sobre el plan nacional de movilidad, reunió a más de 800 personas representantes de movimientos sociales y ONG, incluidas organizaciones dirigidas por migrantes, a través de una serie de reuniones en 2014. Varias de las recomendaciones formuladas por Comigrar se incorporaron efectivamente al proyecto de la Ley de Migraciones de 2017. Como observaron recientemente de Oliveira y Sampaio (2020), esto se produjo tanto a través de audiencias públicas como de manera informal a través de la influencia de actores activos en la sociedad civil y la Comisión de Expertos responsable del diseño del proyecto de ley en el congreso. Durante los debates del proyecto de ley en el parlamento de Brasil, con el fin de impulsar su aprobación, varias ONG organizaron campañas de concienciación pública sobre los derechos de los migrantes y para contrarrestar las ideas erróneas comunes sobre la movilidad humana (de Oliveira & Sampaio 2020).

Igual que la Ley de Refugiados, la Ley de Migración de 2017 también supuso una serie de avances. El más importante es que concibió al migrante (no al extranjero) como un sujeto de

derechos humanos, sustituyendo así el enfoque exclusivo de la antigua legislación en la seguridad nacional (de Oliveira & Sampaio 2020; Jarochinski et al. 2020; Zapata & Fazito 2018). Sin embargo, la aprobación de la ley sucedió simultáneamente con un nuevo contexto político en Brasil, en el que los actores conservadores fueron ganando progresivamente poder y relevancia (Acosta et al. 2018). Este contexto cambiante se reflejó inmediatamente no solo en una serie de vetos presidenciales a la legislación aprobada, sino también en el decreto que regulaba el proyecto de ley. Este último concedió un poder sustancialmente mayor a las fuerzas de seguridad del Estado —como la Policía Federal— del que se había previsto originalmente. Por ello, se ha argumentado que el decreto no respeta el espíritu de la propia ley y contraviene la constitución del país (de Oliveira & Sampaio 2020; Machado 2020).

El inicio del desplazamiento masivo de venezolanos por América Latina tuvo lugar en medio de estos debates, tras el agravamiento de la crisis humanitaria en ese país a finales de 2016. En un contexto de creciente refuerzo de la seguridad en Brasil, las ONG se hicieron oír al pronunciarse contra la deportación de ciudadanos venezolanos en 2016, y contra el cierre de fronteras en el estado nortero de Roraima en 2018 (Alvim 2018; Milesi et al. 2018). Además, estas organizaciones han presionado activamente a los organismos administrativos sobre la correcta interpretación de la nueva ley, y de la constitución brasileña, que garantiza la igualdad entre los nacionales y los inmigrantes que residen en el país. Esto se ha logrado en estrecha alianza con la Oficina del Defensor del Pueblo (DPU), mediante la presentación de procesos civiles públicos. Como resultado de varios de estos procesos, la población migrante y refugiada ha podido acceder a una serie de beneficios sociales como la exención de la tasa de residencia del Mercosur para los venezolanos; el Programa de Prestación Continuada (BPC), que garantiza un salario mínimo a las familias de bajos ingresos; y, más recientemente, el auxilio financiero de emergencia COVID-19 (Milesi & Coury 2018; Zortea 2017; Bengochea et al. 2020).

¹El CNIg se creó en 1980 a través de la Ley Federal 6.815. Es responsable de cuatro áreas principales: la formulación de políticas migratorias; la coordinación de las actividades de migración laboral; la evaluación de las demandas nacionales de mano de obra calificada; y la promoción de estudios relacionados con la migración laboral. El CNIg está integrado por representantes de diversas instancias del gobierno, asociaciones industriales, sindicatos y sociedad civil.

Acogida, interiorización e integración de migrantes y refugiados

A pesar de su avanzada legislación en materia de movilidad y refugio, existe un reconocimiento general de que el estado brasileño tiene actualmente una capacidad y una voluntad política limitadas para cumplir con sus compromisos nacionales e internacionales hacia los migrantes y refugiados (Zapata & Tapia, próxima publicación; Jatobá & Martuscelli 2018). Como consecuencia, el país ha adoptado históricamente un modelo de responsabilidad compartida entre el estado, ACNUR, las ONG y, más recientemente, la OIM, en lo relativo a la acogida, reubicación e integración de estas poblaciones. Si bien este modelo tiene sus raíces en los años setenta, ciertamente se ha potenciado en la última década.

Cuando los haitianos empezaron a llegar a Acre y Amazonas en 2010, las organizaciones de la sociedad civil fueron las primeras en proporcionarles refugio y alimentos. Aunque el estado de Acre asumió posteriormente la responsabilidad de la asistencia, las ONG de Amazonas siguieron siendo los principales actores en la provisión de vivienda y suministros básicos a los migrantes en los años siguientes (Mamed 2016). Se observó una tendencia similar en el estado de Roraima tras la constante afluencia de venezolanos a través de la frontera norte de Brasil. Aunque la Operación Acogida puso en marcha varios albergues en las ciudades de Boa Vista y Pacaraima en 2018, muchos siguen siendo gestionados por ONG (Jarochinski et al. 2020). Del mismo modo, el programa de interiorización, que se asemeja a un programa de reasentamiento o reubicación interna, se gestiona principalmente a través del apoyo de las ONG, que generalmente son responsables de ofrecer a las familias reubicadas un alojamiento inicial, alimentos e incluso transferencias directas de fondos (Baeninger 2018; Rosita Milesi & Coury 2018).

Este modelo de responsabilidad compartida también se reproduce en el ámbito de la integración de los migrantes y refugiados. Ya sea de forma autónoma o como socios de implementación con ACNUR, las organizaciones no gubernamentales han ofrecido una amplia gama de servicios a los migrantes y refugiados (Jatobá & Martuscelli 2018; Jubilit 2006). Estos incluyen, a título meramente enunciativo, clases de portugués, orientación para encontrar empleo, documentación y apoyo legal e, incluso, la prestación de servicios de interpretación en las consultas médicas (Milesi & Coury 2018; Zortea 2017). Aunque la importancia de estas actividades es innegable, también hay que señalar que la delegación de las funciones tradicionales del estado a las organizaciones de la sociedad civil, ya sea durante la acogida o la integración, es problemática. Por ejemplo, podría dar lugar a desigualdades clave en la prestación de servicios, principalmente, porque las distintas ONG tienen capacidades diferentes a la hora de ofrecer

apoyo integral a las poblaciones en situación de movilidad. Moulin (2012) y Vera Espinoza (2018) también han señalado que la integración en Brasil —y en otros países de América Latina— se configura con frecuencia a través de una lógica perniciosa sobre quién la «merece», por la cual se considera a quienes demandan más asistencia, o muestran insatisfacción, no como titulares de derechos, sino fundamentalmente como individuos ingratos.

Sin embargo, los propios migrantes y refugiados han sido históricamente muy reivindicativos con sus derechos. Aunque el Estatuto de Extranjería prohibía a estas poblaciones participar en manifestaciones o asambleas formales, su influencia fue notoria; por ejemplo, durante el ciclo de conferencias Comigrar, así como en la Marcha de los Migrantes (Marcha dos Migrantes), una protesta que tiene lugar en São Paulo todos los años desde 2007. Muchas de las reivindicaciones expresadas por los migrantes en estos actos, que también fueron respaldados por organizaciones no gubernamentales, se incorporaron con éxito a la Ley de Migración brasileña de 2017. Otra protesta histórica que tuvo lugar en 2009 incluyó una huelga organizada por refugiados palestinos reasentados frente a la oficina de ACNUR en Brasilia, donde las familias exigieron más asistencia de la agencia o su retorno asistido a un campo de refugiados en Jordania (Vera Espinoza 2018; Moulin 2012). Más recientemente, Martuscelli (2020) describe cómo los refugiados congoleños organizaron una queja formal dirigida al Ministerio de Asuntos Exteriores, exigiendo la tramitación oportuna de sus solicitudes de reunificación familiar. A pesar de la proliferación de estas diferentes formas de movilización política, el papel de los movimientos dirigidos por migrantes ha recibido hasta ahora relativamente poca atención en el contexto brasileño.

Como se ha afirmado anteriormente, el papel de defensa de las OSC es digno de mención tanto en lo que respecta al marco nacional de protección de los refugiados como a la nueva Ley de Migración. Estos instrumentos, aunque separados por un periodo de veinte años, presentan una serie de características innovadoras, como la formalización de un modelo de responsabilidad compartida entre el Estado, las Naciones Unidas y las organizaciones de la sociedad civil. Sin embargo, esto no significa que la relación entre estos actores y las autoridades públicas esté libre de tensiones. En muchos casos, las ONG desempeñan funciones que normalmente son atribuibles al estado y, la mayoría de las veces, están en primera línea de la gestión de las crisis humanitarias. La pandemia de COVID-19, la mayor emergencia sanitaria del último siglo, ha sido sistemáticamente subestimada por el gobierno federal brasileño. Al mismo tiempo, se ha utilizado como excusa para restringir todavía más la movilidad y aumentar la militarización de las fronteras. En este contexto de excepcionalidad permanente (véase Vera Espinoza et al., próxima publicación), investigamos cómo las OSC han luchado por proteger los derechos de los migrantes y los refugiados en el país y han apoyado a estas poblaciones durante la pandemia.



4.2 Breve historia de la sociedad civil en India

Las organizaciones de la sociedad civil en India surgieron a finales del siglo XIX, a partir del doble proceso de resistencia al colonialismo y de las prácticas reformistas que formaron parte de la lucha por la independencia del país. En el proceso de reivindicación de la soberanía, se desarrollaron conjuntamente las ideas de democracia, ciudadanía y sociedad civil. La idea de una nación independiente india evolucionó, por tanto, junto con el desarrollo de la acción civil y la resistencia al imperialismo (Chandhoke 2011)².

Los momentos históricos que han marcado el curso de la sociedad civil en India se remontan a mucho antes de la independencia. En el siglo XIX, los movimientos de reforma social y religiosa como el Brahmo Samaj³ y el Arya Samaj⁴ trabajaron por la educación de las mujeres y el matrimonio en segundas nupcias de las viudas. Estos grupos se oponían a aspectos de la ortodoxia hindú, como las jerarquías basadas en las castas, el ritualismo y la idolatría. En paralelo hay que destacar el trabajo de los misioneros bajo el dominio británico. La aprobación de la Ley de Regulación de 1813 dio lugar a un aumento de la actividad misionera en India, con un enfoque especial en la promoción de la educación, la salud, el bienestar social y la reforma (Sahoo 2013).

Con la formación del Congreso Nacional Indio en 1885 y la Conferencia Nacional de Reforma Social en 1886, el nacionalismo y la reforma social se entremezclaron, ya que la descolonización se percibía en sí misma como un llamado a formar una nueva nación. La base de esto fue la filosofía de Mahatma Gandhi de no separar las cuestiones sociales de las políticas. Así, hizo hincapié en el «trabajo constructivo» para que los congresistas trabajaran por la mejora de la vida de los pobres y marginados (Shah 2019; Sahoo 2013).

Parte de esto suponía ir más allá de las prácticas feudales de propiedad de la tierra, el trabajo en régimen de servidumbre y otras desigualdades de este tipo que existían desde hacía tiempo.

La década de 1890 fue testigo de la formación de organizaciones basadas en las castas que también actuaron como organismos de movilización campesina contra el feudalismo. Del mismo modo, también comenzaron a surgir movimientos obreros en diversas partes del país, como en las fábricas de algodón de Bombay y en las de yute de Calcuta. Los trabajadores comenzaron a sindicarse (Sahoo, 2013). La década de 1910 fue testigo del nacimiento de Mahatma Gandhi y del Dr. B. R. Ambedkar como líderes sociales.

El Motín de 1857 fue un punto de inflexión en la resistencia india a las dominaciones de todo tipo, especialmente al Imperio Británico. A partir de 1885 se desarrollaron varias iniciativas y movimientos autónomos entre los trabajadores industriales, los campesinos, las castas subordinadas, las identidades religiosas, las formaciones étnicas y lingüísticas, y los grupos de mujeres. El dominio británico y sus políticas de propiedad privada de la tierra erosionaron las tradiciones de propiedad colectiva dentro de la sociedad tribal, lo que dio lugar a movimientos campesinos. El movimiento obrero también empezó a surgir en varias partes del país. En la década de 1890, los trabajadores de las fábricas de algodón de Bombay y de yute de Calcuta organizaron protestas por las pésimas condiciones laborales (Sahoo 2013). A finales del siglo XIX, el descontento entre los nuevos trabajadores industriales iba en aumento, lo que dio lugar a huelgas espontáneas y a la interrupción del trabajo. Con este prolongado telón de fondo, los Adivasis, los campesinos sin tierra y la clase obrera se

colectivizaron y las consignas, como “Viva la revolución”, y las protestas se hicieron comunes en los espacios públicos (Shah 2019: 46).⁵

Bajo el liderazgo de Jawaharlal Nehru (1947-1964), el Partido del Congreso sirvió como vínculo institucional integrador único entre el estado y la sociedad en India, basado en un modelo secular y socialista de construcción de la nación. El principio de “trabajo constructivo” llevó a la formación de la Comisión de Planificación de India en 1950 y a un enfoque centralizado hacia el desarrollo rural, que tomó forma a través de los Planes Quinquenales (Shah 2019; Sahoo 2013); en contraste, el régimen de Indira Gandhi (1967-1977) vio el declive de la armonización entre el estado y las instituciones políticas, y la rebeldía de la sociedad civil contra las injusticias de los años de la Emergencia de 1975-1977 (Shah 2019; Chandhoke 2003; Dhanagare 2001). Este gobierno prohibió la participación política de las organizaciones de voluntarios. La Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA) de 1976 se promulgó en el parlamento para mantener la vigilancia sobre las asociaciones políticas y las organizaciones de voluntarios que recibían fondos extranjeros (Sahoo 2013). Chandhoke argumenta firmemente que “la sociedad civil ha obtenido sus victorias más espectaculares cuando se ha enfrentado a las dictaduras, pues nada despierta más la desafección y la rabia política que la negación de los derechos civiles y políticos.” (2003: 4). Los movimientos contra la Emergencia provocados por el malestar social movilizaron y politizaron a las masas de toda India. Por tanto, la esfera de la sociedad civil se amplió para incluir especialmente a los trabajadores municipales e industriales, así como a los trabajadores pobres y sin tierras.

El régimen de Emergencia condujo a la derrota de Indira Gandhi en marzo de 1977 y el Partido Janata llegó al poder bajo el liderazgo de Morarji Desai (1977-1979). Como parte de su programa de mejora rural, el Partido Janata fomentó activamente la creación de organizaciones voluntarias en el campo. El gobierno destacó el papel de las agencias de voluntariado en la formación de la ciudadanía y aumentó el financiamiento y el apoyo burocrático a las ONG. Por ejemplo,

el gobierno permitió a las empresas deducir las donaciones a las ONG de sus ingresos imposables. Estas políticas favorables a las ONG del gobierno de Janata también beneficiaron en gran medida al Rashtriya Swayam Sevak Sangh (RSS, que también es la matriz ideológica del partido político Bhartiya Janata) y a otras organizaciones nacionalistas hindúes, que fueron sus aliados durante la Emergencia.

El Partido del Congreso volvió al poder en enero de 1980 (hasta 1984) y nuevamente empezó a restringir el funcionamiento del sector del voluntariado. Modificaron la Ley de Regulación de Contribuciones Extranjeras (FCRA) en 1984, estableciendo un gran número de obligaciones fiscales y legales (Sahoo 2013). Esto dio un control sin precedentes al estado sobre el funcionamiento de la sociedad civil, que continúa hasta nuestros días. Con el desplome del Partido Janata, algunos de sus miembros fundaron el Partido Bhartiya Janata (BJP) el 5 de abril de 1980 y se presentaron como la única alternativa creíble al Partido del Congreso en el poder. El BJP llegó al poder en 1998 y gobernó hasta su derrota en 2004, adoptando agresivamente modelos neoliberales de desarrollo.

El crucial periodo de posliberalización de los años 90 tuvo un gran impacto en la sociedad civil. India acogió con los brazos abiertos el periodo de liberalización posterior a 1990.⁶ La ayuda internacional al desarrollo fue bien recibida por las ONG, y cuestionada por organizaciones tanto de izquierdas como de derechas, como el RSS (Biswas 2006). Al mismo tiempo, la década de 1990 fue también el momento en que los movimientos sociales y de base articularon las cuestiones básicas del desarrollo en el marco de los derechos. Varios de estos movimientos civiles florecieron posteriormente en India desde la década de 1990 en relación con cuestiones sociales y medioambientales: contra el desplazamiento tribal en Orissa, contra la minería de bauxita en Andhra Pradesh, y el movimiento por la conservación del agua en Rajastán, entre otros asuntos.

² La propia migración contribuyó a que la organización de la sociedad civil fuera más global o transnacional. Encontramos muchas organizaciones de la sociedad civil dirigidas por la diáspora y los migrantes que comprenden diversas regiones y países. Esto no solo les ayudó a movilizar recursos financieros, sino también a movilizar ideas y tecnologías, entre otros recursos. Las organizaciones de la sociedad civil (dirigidas por su diáspora) tienen una larga trayectoria en la participación política de la India; por ejemplo, el «Movimiento Ghadar» (que fue un movimiento político internacional de principios del siglo XX, fundado por indios expatriados que vivían en la costa oeste de Estados Unidos y Canadá para derrocar a los británicos). Subhash Chandra Bose y Mahatma Gandhi también impulsaron el movimiento anticolonial a través de sus redes, como el Ejército Nacional Indio (INA), en países fuera de la India, como en Sudáfrica, islas Mauricio y entre las asociaciones de estudiantes indios en el Reino Unido y Estados Unidos. Estas organizaciones transnacionales de la sociedad civil desempeñaron un papel importante durante la lucha por la libertad de la India en particular, y el movimiento anticolonial en general.

³ Fundada por Ram Mohun Roy en 1828, fue una organización de reforma religiosa que no creía en las castas ni en la religión.

⁴ Fundado en 1875 por Dayananda Sarasvati, fue un movimiento reformista del hinduismo moderno, cuyo objetivo era restablecer las Vedas, las primeras escrituras hindúes.

⁵ Es imprescindible mencionar aquí la masacre de Jallianwala Bagh de 1919. Es un ejemplo de una protesta ciudadana pacífica que fue acallada con una fuerza brutal por parte de los británicos que mataron a miles de manifestantes pacíficos en la ciudad de Punjab. La impunidad de la que gozaba el ejército británico hizo posible que el responsable de esta masacre, el general Dyer, quedara impune sin recibir ningún castigo por sus actos. El hecho de que los británicos asesinaran a tanta gente ese día solo sirvió para alimentar la conciencia nacional de las injusticias sociales existentes en todos los espectros sociales y políticos.

⁶ India se integró en el bloque soviético durante los años de la Guerra Fría. La década de los 90 marcó un periodo de cambios ideológicos, políticos y económicos clave en cuanto a las estructuras existentes que afectaron al statu quo de la India a nivel interno e internacional.

De la trayectoria histórica de la formación de la sociedad civil en India se desprende su intrincada relación con el estado que, a veces, la sociedad civil funciona como una maquinaria del estado para reproducir sus intereses y planes y, en ocasiones, como un ente antiestado para cuestionar sus políticas. La sociedad civil surgió como un espacio en el que la reforma social fue llevada a cabo por organizaciones que diferían en su perspectiva y enfoque. La labor se centró en diversas cuestiones que englobaban el género, la religión, la casta y el trabajo. En la intersección de estas estructuras y de las diversas formas de marginación trabajan el estado, la sociedad civil y las personas a distintos niveles. La sociedad civil interactúa con el estado y también se distingue de él.

El actual tercer sector de India es diverso y numeroso. Según Srivastava y Tandon (2005), India cuenta con más de 1,2 millones de organizaciones en el sector de las organizaciones sin ánimo de lucro. Dentro de este vasto ámbito, y no es de extrañar dada la magnitud del sector laboral informal del país, numerosas organizaciones de la sociedad civil trabajan en cuestiones que responden a las necesidades de los migrantes y refugiados de India. Estas organizaciones del tercer sector van de lo local a lo nacional, pasando por lo internacional; ocupan numerosas posiciones sociopolíticas; muchas están estrechamente aliadas con los sindicatos y las organizaciones de trabajadores, mientras que otras son religiosas o son dirigidas y organizadas por los propios trabajadores; algunas son pequeñas, mientras que otras son operaciones logísticamente complejas; muchas trabajan en asociación con los gobiernos locales y el sector privado y también proporcionan representación legal a los indocumentados en colaboración con los magistrados de distrito y los tribunales locales. Su situación legal también varía mucho. Según la legislación india, las organizaciones de voluntarios están obligatoriamente registradas en virtud de la ley central o estatal en función de su situación jurídica, como sociedades, fundaciones benéficas (públicas/privadas) o empresas sin ánimo de lucro. Sus métodos operativos también varían, ya que pueden funcionar como cooperativas, sindicatos u organizaciones religiosas (Chandreashekhar 2018).

Respuesta de la sociedad civil a la pandemia

Para entender el papel de la sociedad civil durante la pandemia, es importante tener en cuenta el impacto del partido gobernante, el BJP (2014-actualidad) en la sociedad civil. También es importante tener en cuenta que las organizaciones de la sociedad civil de India se han visto influidas por movimientos internacionales como los movimientos feministas, los movimientos medioambientales y otros movimientos de derechos civiles. Parte de la acción gubernamental hacia las organizaciones de la sociedad civil está relacionada con estos vínculos internacionales, ya que las organizaciones de India reciben financiamiento de organizaciones internacionales, por ejemplo, para trabajar en materia de género y sexualidad.

El gobierno ha tomado medidas severas contra los actores de la sociedad civil, deteniendo a activistas de derechos humanos y líderes estudiantiles, y reprimiendo a los activistas en favor de las libertades civiles (Kode & Jacob 2017). También aprobó la Ley de Modificación de Regulación de las Contribuciones Extranjeras (FCRA), que tiene efectos potencialmente adversos sobre las ONG y las instituciones benéficas. Esta modificación ha dificultado el funcionamiento de las ONG, ya que la ley no permite la redistribución de los fondos de una organización a otras organizaciones, aunque estas sigan cumpliendo con la FCRA, lo que obliga a muchas a cancelar sus actividades ante la falta de fondos. Las organizaciones que dependen del financiamiento de responsabilidad social corporativa (RSC) se enfrentan a mayores dificultades porque el financiamiento corporativo se está reorientando hacia las labores de ayuda inmediata y el fondo de Asistencia y Ayuda Ciudadana en Situaciones de Emergencia del Primer Ministro (PM CARES) (Rustagi & Wu 2020). Entre 2014 y 2020, el gobierno liderado por el BJP revocó las licencias de más de 20 000 ONG para recibir fondos extranjeros en virtud de la FCRA. No obstante, mientras el estado se enfrentaba a la respuesta a la COVID-19, el grupo de expertos del gobierno NITI Aayog solicitó a más de 92 000 ONG que ayudaran al gobierno a luchar contra la pandemia (Ramachandran 2020). A pesar de este reducido espacio de la sociedad civil, fueron los individuos y las ONG los que se unieron durante el periodo de confinamiento, impuesto repentinamente y con poca preparación por el gobierno el 24 de marzo de 2020.



5. Análisis de los hallazgos

5.1 Hallazgos sobre Brasil

5.1.1 Desafíos a los que se enfrentan los migrantes durante la pandemia

i. Acceso a la documentación, irregularidad y cierre de fronteras

En Brasil, el primer obstáculo al que se enfrentaron los migrantes y refugiados durante la pandemia está relacionado con la irregularidad. Los que ya vivían en el país se enfrentaron a múltiples dificultades para renovar sus documentos, principalmente, porque la Policía Federal —la institución responsable de la aplicación de la política migratoria, incluida la expedición de documentos de migración y refugio— había reducido mucho las citas, debido al retraso producido por el cierre de sus oficinas al principio de la pandemia. Según nuestros entrevistados, los procesos de documentación y regularización que solían durar tres meses, ahora tardan de seis a nueve meses, y en algunos casos, incluso más de un año. Para complicar aun más las cosas, todos los procedimientos se pasaron a un formato en línea, lo que representa una carga adicional para las personas que no tienen las herramientas tecnológicas o los conocimientos para acceder a estos servicios. Aunque el gobierno emitió una ordenanza (Portaria n.º 18-DIREX/PF) que determina la prórroga automática de los documentos vencidos, nuestros entrevistados informaron de que diferentes instituciones públicas siguen exigiendo documentos en día, aparentemente, sin conocer la nueva normativa.

Desde el inicio de la pandemia, la Casa Civil de la Presidencia de la República, el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública y el Ministerio de Salud emitieron más de 20 ordenanzas relacionadas con el cierre de fronteras. Estos instrumentos legales no honran explícitamente el compromiso internacional de Brasil de proteger a las personas que buscan refugio o

necesitan protección humanitaria (uno de los emblemas de la política migratoria brasileña). Por ejemplo, la Ordenanza 255 del 22/05/20, creó un vacío legal para negar la posibilidad de solicitar protección a los refugiados (véase el apartado 5.1.3). A pesar de los obstáculos a los que se enfrentan los migrantes que ya vivían en el país, los entrevistados destacaron que las personas recién llegadas han sido las más afectadas por los cambios en la gestión de la migración.

Así, el cierre de las fronteras ha tenido dos consecuencias principales: i. un aumento del número de personas que entran en el país a través de canales no oficiales (trochas), lo que ha dado lugar a un número creciente de migrantes en situación irregular; ii. posibles cambios en la gobernanza de la movilidad a medio y largo plazo (véase el apartado 5.1.3).

La irregularidad crea una cadena de otros problemas. Tal y como afirmaron en repetidas ocasiones nuestros entrevistados, uno de sus efectos más visibles se produce en el empleo formal, ya que las empresas no pueden contratar a los sin papeles o, en muchos casos, discriminan a los que tienen una situación legal vencida o temporal. Este fenómeno no hace más que aumentar el desempleo, sobre todo, en el sector de la hostelería, en el que trabajaban muchos migrantes y refugiados. Como consecuencia, muchas personas que antes tenían empleos formales se vieron empujadas hacia el sector informal. Debido a las frecuentes medidas de confinamiento, algunas actividades como la venta de alimentos se han visto constantemente interrumpidas y las familias que dependían de estos negocios para sobrevivir han notificado cuantiosas pérdidas de ingresos. Según nuestros entrevistados, una de las consecuencias de estas dificultades parece ser el creciente número de migrantes que aceptan trabajos en condiciones análogas a la esclavitud; situaciones que no son nuevas pero que ciertamente han encontrado un nuevo⁷ impulso durante la pandemia.

ii. Aumento de las vulnerabilidades socioeconómicas

Las dificultades económicas también han obligado a las personas a depender casi por completo de las prestaciones estatales. A diferencia de otros países de América Latina, las leyes brasileñas garantizan a todos los migrantes, independientemente de su situación legal, el acceso a la protección social (Vera Espinoza et al., próxima publicación), aunque, como se indica en el apartado 4.1, las OSC y la Oficina del Defensor del Pueblo a menudo han tenido que luchar por estos derechos. Los entrevistados mencionaron una serie de obstáculos prácticos con los que se encuentran los migrantes y refugiados para acceder a los programas de mitigación del estado, especialmente, el Auxilio⁸ Financiero de Emergencia. El más obvio de ellos es la irregularidad, ya que muchos, especialmente, los que han llegado recientemente al país, no tienen los documentos necesarios para solicitarlo, es decir, el CPF y el Registro Nacional de Migración (RNM). La

desinformación, las barreras lingüísticas y las dificultades para acceder al sistema de solicitud en línea del gobierno fueron otros de los retos citados. Según un entrevistado, se produjo un proceso similar con algunos tipos de ayuda humanitaria.

La vulnerabilidad económica también ha afectado a la capacidad de los migrantes para enviar dinero y bienes a sus familias en sus países de origen, según 19 de los 25 entrevistados. La caída de las remesas se debe a tres factores principales: el fuerte aumento del desempleo, la inflación y el incremento de la incertidumbre. Algunos entrevistados han afirmado que los migrantes suelen querer ayudar a sus familias a toda costa, por lo que suelen dar prioridad a las remesas, en lugar de garantizar su propio bienestar en Brasil. Además, la imposibilidad de que los migrantes envíen remesas también incentiva la entrada irregular de los familiares que se han quedado en el país de origen. Según nuestros entrevistados, este es especialmente el caso de los venezolanos, que dependen en buena medida de las actividades transfronterizas.



Uno de los desafíos es el acceso a la ayuda financiera, ya sea el auxilio financiero de emergencia o la ayuda humanitaria [...] hay muchos proyectos internacionales que necesitan notificar la residencia de los beneficiarios, y el tipo de apoyo prestado a cada persona; y no es posible registrar a las personas de esa manera [sin documentos].

(Representante de una organización religiosa en Brasilia)

⁷ <https://reporterbrasil.org.br/2019/12/pacto-pelo-trabalho-decente-nas-confeccoes-de-sao-paulo-completa-10-anos/>
<https://agenciabrasil.ebc.com.br/direitos-humanos/noticia/2020-01/brasil-teve-mais-de-mil-pessoas-resgatadas-do-trabalho-esclavo-em>

⁸ El Auxilio Financiero de Emergencia es una ayuda dirigida a los adultos, mayores de 18 años, que realizan un trabajo informal de baja remuneración. Un trabajo de baja remuneración se define como aquel que paga menos de la mitad del Salario Mínimo Nacional. El Auxilio Financiero se fijó inicialmente en 600 reales por mes (116 dólares/mes) durante un periodo de tres meses, a partir de abril de 2020. Posteriormente, el Auxilio Financiero de Emergencia se prorrogó otros dos meses: julio y agosto (Decreto 10.412/30 de junio). En septiembre de 2020, el gobierno instituyó una nueva prórroga de la ayuda durante otros cuatro meses, ahora con un valor reducido: 53 dólares por mes (Ley Provisional 1000/2 de septiembre)



Otro de los principales problemas planteados por nuestros entrevistados ha sido la creciente inseguridad alimentaria y de la vivienda de los migrantes y refugiados. Dado que muchas personas no tenían contratos de alquiler formales, los propietarios podían cancelar fácilmente los arrendamientos. Las dificultades para pagar el alquiler han obligado a los migrantes a quedarse sin hogar, a compartir casa o a regresar a los albergues gestionados por el gobierno. En Boa Vista, la situación empeoró por los desalojos de migrantes de varios asentamientos informales, llevados a cabo por el municipio y las fuerzas de seguridad durante la pandemia. Aunque a algunos migrantes se les ofreció ser reubicados en albergues gestionados por el gobierno, otros acabaron en la calle. Como han señalado en repetidas ocasiones los representantes de las OSC del norte de Brasil, la gente suele preferir vivir en la calle antes que volver a esos espacios, donde su autonomía y privacidad se ven gravemente limitadas. Como resumió un representante de una organización religiosa de Boa Vista, «los migrantes me han dicho en repetidas ocasiones que volver a los albergues [gestionados por la Operación Acogida] es como si retrocediéramos no uno, sino varios pasos hacia atrás. Desde que salimos de Venezuela, hemos retrocedido, lo hemos perdido todo». Por ello, no es raro encontrar a numerosas familias compartiendo pequeños apartamentos, donde las condiciones no permiten seguir las pautas de distanciamiento social.

Otra barrera clave es el acceso desigual a los servicios médicos, que puede estar relacionado con el miedo de los migrantes a la deportación, las barreras lingüísticas, el maltrato y la falta de información entre el personal de la salud sobre los derechos de los migrantes. La prevalencia del coronavirus entre los migrantes es difícil de determinar, ya que los datos oficiales sobre el número de casos y muertes no están desglosados

por nacionalidad. Según los participantes en la investigación, esta falta general de información ha afectado a la capacidad de las OSC para impulsar políticas de salud pública dirigidas específicamente a los migrantes y refugiados. La mayoría de los representantes de las organizaciones también destacaron que los múltiples efectos de la pandemia en la salud de los migrantes también pueden estar imponiendo una mayor carga psicológica a estas poblaciones.

Aunque la pandemia ha afectado a la mayoría de los migrantes y refugiados en Brasil, sus impactos se han diferenciado según las características sociodemográficas y el tiempo de llegada a Brasil, entre otros. Al menos 10 de los 25 entrevistados afirmaron que la pandemia tuvo un mayor impacto en las mujeres con hijos, dada la falta de guarderías y de oportunidades laborales. Muchos entrevistados informaron de un aumento de la violencia doméstica contra las mujeres migrantes. Se identificó a los niños como un grupo muy afectado por la pandemia debido a las dificultades para acceder tanto a los documentos como a la educación durante la pandemia.

Varios entrevistados informaron de que diferentes grupos indígenas, especialmente, las comunidades Warao desplazadas de Venezuela, se han visto especialmente afectadas por la pandemia debido a sus especificidades socioculturales y al hecho de que suelen tener menos recursos financieros y humanos que otros migrantes. Las respuestas del gobierno dirigidas a estas poblaciones no solo han sido insuficientes, sino que no hay consenso sobre soluciones duraderas para ellas. Además, muchos Warao no están acostumbrados a la vida en las ciudades y no hablan español o portugués, por lo que muchos han acabado trabajando y viviendo en la calle.

iii. Estrategias de adaptación de los migrantes

Los migrantes han adoptado dos estrategias principales para hacer frente a los retos mencionados: la primera está relacionada con la búsqueda de fuentes de ingresos alternativas, mientras que la segunda se refiere a la articulación de redes de solidaridad entre los migrantes (a veces con el apoyo de las OSC). Según nuestros entrevistados, un número cada vez mayor de migrantes que han perdido su empleo están emprendiendo negocios desde sus casas, especialmente, en el sector de alimentación, a pesar de los obstáculos. Como subraya un entrevistado de una ONG de São Paulo:



Muchos no tienen espacio suficiente para desarrollar sus productos en casa, o no tienen una buena conexión a Internet, lo que dificulta el contacto con los clientes. Lo mismo ocurre con el idioma, pueden comunicarse bien cara a cara, pero es más difícil por teléfono o en línea. Algunas personas preparan la comida y la venden a través de aplicaciones. Depende de su tiempo en el país y de lo bien que hablen portugués.

(Representante de una ONG en São Paulo)

La segunda estrategia está relacionada con la articulación de redes de solidaridad entre los migrantes. Según varios entrevistados, muchas familias de migrantes se ofrecen a acoger a otros migrantes que han sido desalojados durante la pandemia. En otros casos, los migrantes comparten información importante sobre cómo acceder a los programas de protección social del gobierno. Como nos contó un entrevistado de una OSC de Río de Janeiro, un grupo de venezolanos grabó vídeos en español enseñando a otros migrantes cómo acceder al auxilio financiero de emergencia. Otro ejemplo fue la creación de la llamada «Bolivia Solidaria», una enorme red de bolivianos creada con el objetivo de distribuir canastas de alimentos, que recibió el apoyo no solo de las OSC, sino también de otras comunidades de migrantes, principalmente coreanos y peruanos.

Otra estrategia importante empleada por los migrantes durante la crisis sanitaria ha sido adaptarse a una mayor movilidad, tanto interna como internacional. Según algunos entrevistados, la crisis de la COVID-19 ha reforzado un patrón pre-pandémico de re-emigración hacia Estados Unidos y Canadá. Otros han decidido volver a sus países de origen, o se han desplazado dentro de Brasil en busca de mejores oportunidades económicas, o trasladado a otros estados donde contaban con la ayuda de otros familiares.

5.1.2 Papel de las organizaciones de la sociedad civil: lecciones y buenas prácticas

A medida que la pandemia exacerbó las vulnerabilidades de los migrantes y refugiados en Brasil, también aumentaron las exigencias para las organizaciones de la sociedad civil. En este apartado, analizamos cómo las ONG, las organizaciones religiosas y los grupos dirigidos por migrantes se adaptaron y respondieron a estas necesidades cada vez mayores. Aunque el papel, la administración y los objetivos de las organizaciones y los grupos entrevistados difieren, al igual que la región de Brasil en la que se encuentran, la mayoría de las conclusiones que se analizan aquí son comunes a todos los grupos.

i. Organizaciones de la sociedad civil: Supliendo carencias

El ámbito de actuación de las OSC en Brasil es tan amplio como su alcance geográfico. Aunque las actividades y los programas varían según las organizaciones en función de su experiencia, sus acuerdos institucionales y su financiamiento, la mayoría de los programas desarrollados por estas organizaciones abarcan tres áreas: apoyo a los migrantes y refugiados a su llegada y durante el proceso de integración, defensa y asistencia de emergencia. Durante la pandemia, la mayoría de las organizaciones han conseguido continuar con sus actividades de apoyo a la llegada de migrantes y refugiados, con programas como la provisión de cursos de idiomas, asistencia jurídica, habilidades de empleabilidad y actividades de búsqueda de empleo, información sobre vivienda y refugio, así como asistencia para acceder a los servicios públicos y a la documentación.

El tipo de ayuda que más ha aumentado durante la crisis de la COVID-19 es la asistencia de emergencia destinada a cubrir las necesidades básicas. Esta asistencia de emergencia incluye la provisión o distribución de canastas y vales de comida, kits de higiene, pagos del alquiler a corto plazo y distribución de Equipos de Protección Individual (EPI), entre otros. Al mismo tiempo, las OSC desempeñaron un papel clave en el suministro de información sobre la prevención de la COVID-19, el acceso a la documentación y la solicitud del auxilio financiero de emergencia del gobierno y otros programas de protección social. En algunos casos, también contribuyeron a la aplicación de protocolos de seguridad en los albergues. No hubo diferencias significativas en las respuestas a la crisis sanitaria entre los distintos tipos de OSC.

En particular, incluso las organizaciones dirigidas por migrantes, cuyas actividades habituales no incluían necesariamente la cobertura de las necesidades básicas, comenzaron a hacerlo durante la pandemia. Por ejemplo, una de las organizaciones dirigidas por migrantes que entrevistamos en São Paulo había entablado nuevas asociaciones con la Cruz Roja brasileña y con el municipio de São Paulo para distribuir kits de higiene entre los migrantes, así como asociaciones con empresas privadas y la OIM para distribuir canastas de alimentos. Si bien estos cambios son bienvenidos, muchos coinciden en que no es una actividad que quieran continuar a largo plazo. Como afirmó un representante de los migrantes en São Paulo, “no queremos seguir distribuyendo canastas de alimentos, queremos ofrecer un trabajo a la gente”.

La mayoría de las organizaciones informaron de que mantenían las mismas fuentes de financiamiento, aunque algunas tuvieron que redirigir los fondos a programas de ayuda de emergencia. Sin embargo, al menos 10 de los 25 entrevistados declararon haber aumentado su financiamiento mediante nuevos proyectos o nuevas asociaciones durante la pandemia, mientras que pocas organizaciones informaron de la pérdida o la falta de recursos durante este periodo. El aumento de las asociaciones no es sorprendente, ya que las OSC y las organizaciones dirigidas por migrantes suelen tener mejores contactos sobre el terreno y pueden llegar directamente a las comunidades de migrantes. Sin embargo, es importante señalar que muchas organizaciones destacaron en nuestras entrevistas que, en algunos casos, no pudieron hacer frente a la creciente demanda de suministros de alimentos u otras necesidades básicas durante la pandemia. Por ejemplo, una organización de Manaus afirmó que, aunque tenían alimentos, no tenían suficiente capacidad de distribución, por lo que la institución donante tuvo que contratar a un experto en logística para gestionar la demanda. Otra organización de São Paulo afirmó que algunos migrantes ni siquiera tenían recursos para pagar el transporte para recoger las canastas de alimentos.

Otro problema relacionado con la distribución de canastas de alimentos surgió en relación con las especificidades socioculturales de la comunidad Warao. Según una organización del estado de Bahía, no podían proporcionar las canastas de alimentos a este grupo indígena ya que “los Warao comen alimentos específicos, por lo que no se comerían lo que había en la canasta de alimentos”. Esta cuestión pone de manifiesto la homogeneidad de algunos programas de asistencia de emergencia, que pueden no tener en cuenta las particularidades de las distintas comunidades de migrantes.

Muchas OSC también informaron de que no podían seguir el ritmo de la creciente demanda, ya que no disponían de suficientes recursos financieros o humanos para hacerlo. Como destacó una organización en São Paulo: “carecemos de recursos económicos para ayudar a todos los migrantes que necesitan ayuda con el alquiler, la electricidad, el agua, etc. Estamos limitados por las donaciones que recibimos”. En Brasilia, una organización religiosa declaró que querían prestar servicios más allá de la ayuda de emergencia, pero que no podían hacerlo: “Queríamos supervisar sistemáticamente a la población migrante infectada por el virus, para asegurarnos de que recibían la atención que necesitaban, pero nos vimos desbordados por el aumento de la demanda de otros servicios básicos”.

El aumento de la importancia del papel de la sociedad civil, incluidas las organizaciones dirigidas por migrantes, en la prestación de asistencia de emergencia durante la pandemia plantea dos cuestiones, según nuestros entrevistados. Por un lado, muchas tuvieron que desviar recursos de las actividades de defensa e integración socioeconómica para cubrir la creciente demanda de asistencia de emergencia. Por otro lado, la crisis de la COVID-19 puso de manifiesto la inacción del estado brasileño en relación con los migrantes y refugiados, así como el desconocimiento de estas comunidades por parte de los sectores público y privado. Uno de los representantes de las ONG en Manaus afirmó que la pandemia está evidenciando la dependencia del estado de la sociedad civil y de las organizaciones de la ONU. Como consecuencia, “las OSC tienen una sobrecarga porque están cubriendo ese vacío dejado por el gobierno” (representante de una ONG en São Paulo).

ii. Trabajo híbrido y uso de la tecnología

Las medidas de confinamiento local y de distanciamiento social hicieron que la mayoría de las organizaciones tuvieran que adaptarse rápidamente a nuevas formas de trabajo. La mayoría de las organizaciones estaban acostumbradas a prestar servicios y asistencia en persona. Las OSC trasladaron toda la prestación de servicios a Internet o adoptaron un formato de trabajo híbrido, con menos citas en persona y otros servicios en línea o por teléfono. Este cambio requirió una inversión en tecnología digital y conectividad, así como la formación del personal y de los usuarios en el uso de las nuevas plataformas y también de las creadas por el sector público.

La adaptación a esta nueva realidad fue un tema común en nuestras entrevistas, como destacaron dos miembros de organizaciones de São Paulo y Porto Alegre:



Cuando llegó la pandemia, tuvimos que adaptarnos. El año pasado empezamos a hacer todo en línea, por ejemplo, nuestro servicio de provisión de servicios jurídicos. Enviamos a los migrantes un formulario de Google para que se registraran en línea, donde llevamos un registro para concertar entrevistas.

(Personal de una ONG en São Paulo)

“Tuvimos que adaptar nuestra forma de trabajar y reducir la burocracia en la medida de lo posible. Por ejemplo, empezamos a utilizar Teams, pero era una plataforma difícil para el público al que atendemos. (...) Así que decidimos comprar teléfonos móviles para el equipo, para que pudieran comunicarse directamente por teléfono o WhatsApp. Y, si no tienen teléfono, seguimos teniendo algunos servicios en persona.”

(Personal de una organización religiosa en Porto Alegre)

Trabajar en línea supuso que algunas organizaciones tuvieran que crear, reactivar o intensificar el uso de sus cuentas en las redes sociales, al tiempo que adoptaban otras plataformas como WhatsApp, Zoom, Facebook, Google Meets y Youtube, para ofrecer programas y servicios como la formación a distancia, incluidas las clases de portugués y los servicios de redacción de currículos, en muchos casos trabajando junto a las universidades locales en la elaboración o la entrega del material. Las redes sociales también fueron útiles para difundir información sobre las medidas de prevención de la COVID-19, los derechos de los migrantes y refugiados y el acceso a los programas de protección social.

El modelo híbrido de trabajo adoptado por la mayoría de las organizaciones entrevistadas y la digitalización y tecnologización de ciertos servicios (como la enseñanza de idiomas), brindaron la oportunidad de llegar a una población más amplia que su alcance geográfico habitual. Como declaró el personal de una ONG de São Paulo:

“El año pasado dimos clases de portugués a 415 migrantes. El 30 % de ellos no vivían en São Paulo. Ahora atendemos a personas en 22 ciudades e incluso a personas de otros países. Atendimos a personas de Venezuela y Siria que vendrán a Brasil, porque querían tener nociones del idioma antes de llegar.”

(Personal de una ONG en São Paulo)

Los servicios digitalizados también han contribuido a la creación de asociaciones con organizaciones de otras ciudades, ya sea para compartir experiencias o para apoyarse mutuamente en su labor de defensa de los derechos de los migrantes. Sin embargo, estas nuevas formas de trabajo también tienen limitaciones, ya que en muchos casos los migrantes o los voluntarios carecen de recursos tecnológicos o de conocimientos para manejar las nuevas tecnologías. En algunos casos, como en una ONG de São Paulo, esto llevó a una reducción del número de voluntarios en torno al 50 %, lo que también repercutió en el número de personas atendidas por la organización: “en total, a finales de 2020 habíamos asistido a un 50 % menos de refugiados que el año anterior, unas 1.000 personas de diferentes lugares. En 2019, prestamos asistencia a más de 2.300 personas”. En el caso de las organizaciones que trabajan con migrantes sin hogar o con comunidades Warao sin acceso a la tecnología o a la conectividad, trabajar a distancia no era una opción. Entre las organizaciones dirigidas por migrantes, el principal reto era continuar con las actividades sociales y culturales para promover la inclusión o la orientación en persona para los recién llegados.

Frente a estos retos, muchas OSC de diferentes ciudades brasileñas han trabajado activamente para ser centros de asistencia a los migrantes y refugiados.



Trabajamos como ‘refugios’, especialmente en tiempos en los que circulan tantas noticias falsas y en los que algunas personas intentan aprovecharse de la desinformación.

(Personal de una organización religiosa en Brasilia)



iii. Colaboración y alianzas

Las colaboraciones de las OSC se ampliaron durante la pandemia, tal y como destacaron 22 entrevistados. Mantener estas colaboraciones, antes y durante la pandemia, no ha estado exento de dificultades. Como afirmó uno de los empleados de las ONG de São Paulo, persisten los desacuerdos sobre la mejor forma de prestar asistencia (por ejemplo, políticas de caridad frente a políticas de desarrollo; en persona o a distancia). Además, en el pasado, la escasez de financiamiento también provocó enfrentamientos entre las organizaciones de la sociedad civil y las agencias de la ONU, así como desacuerdos entre estas organizaciones y los migrantes y refugiados (véase Vera Espinoza 2018; Moulin 2012). La mayor vulnerabilidad de los migrantes como consecuencia de la pandemia ha permitido dejar de lado algunas de estas diferencias. Durante este periodo, las OSC aumentaron las asociaciones formales e informales más allá de los patrones tradicionales de colaboración (entre las OSC, las OI y el sector público), incluidas las conexiones translocales con otras OSC en todo Brasil, el aumento de las asociaciones con actores privados y algunas iniciativas transnacionales con OSC y grupos dirigidos por migrantes en toda la región.

Con el aumento de la presencia de diversas organizaciones internacionales (OI) en el país, la mayoría de las OSC y las organizaciones dirigidas por migrantes informaron de que habían continuado o ampliado las asociaciones existentes con estas organizaciones. Entre ellas se encuentra un socio tradicional como ACNUR (ya que muchas organizaciones reciben dinero para programas específicos o trabajan como socios ejecutores) y, más recientemente, con la OIM. Las organizaciones presentes en las ciudades del norte, como Manaos y Boa Vista, también establecieron una cooperación con otras agencias de la ONU, como UNICEF, FPNU y ONU Mujeres, principalmente, como parte del grupo de trabajo humanitario coordinado por la Operación Acogida del gobierno federal. Estas OI han sido clave en el suministro de canastas y cupones de alimentos, servicios de agua y salud, kits de higiene, y refugio, etc. Los entrevistados también informaron de la existencia de asociaciones nuevas o ampliadas con organizaciones transnacionales como la Fundación Panamericana para el Desarrollo, MSF, USAID, World Vision, Cáritas Internacional y los Servicios Jesuitas de España.

Las OSC también informaron de la existencia de una mayor colaboración entre organizaciones de la sociedad civil. Por ejemplo, un trabajador de una ONG de Bahía, mencionó cómo crearon una “red alternativa” de organizaciones de la sociedad civil para poder combinar conocimientos y facilitar las derivaciones, y al mismo tiempo “trabajar colectivamente para presionar al sector público para que haga su trabajo”. Algunas organizaciones también informaron de que algunas ONG más grandes han estado apoyando a las organizaciones más pequeñas con donaciones.

Otras asociaciones clave que se han intensificado durante la pandemia son la colaboración con la Oficina del Defensor del Pueblo (ODP) y con actores privados. Las OSC trabajaron en estrecha colaboración con la ODP para liderar los esfuerzos de protección y defensa de los derechos de los migrantes y refugiados a acceder a los servicios de salud y a los programas de protección social. Por otro lado, la colaboración con actores privados se ha materializado a través de donaciones (tanto de empresas como de particulares), distribución de alimentos (desde asociaciones con supermercados locales hasta alianzas con empresas de servicios alimentarios bien establecidas, como Sodexo y JBS) y acceso a puestos de trabajo (tanto en cuestión de formación como de programas de equiparación).

Muchas organizaciones han desarrollado asociaciones específicas con los municipios para facilitar la distribución de alimentos y otras donaciones, para impartir formación sanitaria y otras campañas de información. Un entrevistado de una ONG de Porto Alegre también informó de una asociación informal con la Policía Federal para rellenar los formularios de regularización. En Roraima, una organización se asoció con las autoridades locales para registrar a más de 1000 familias venezolanas para que tuvieran acceso al auxilio de emergencia.

Por último, solo unas pocas organizaciones entrevistadas mencionaron el establecimiento de colaboraciones transnacionales a nivel regional. Por ejemplo, una ONG de São Paulo puso de manifiesto un esfuerzo regional de la sociedad civil que consiguió una audiencia en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en marzo. Otras organizaciones dirigidas por migrantes mencionaron su participación en la campaña transnacional #RegularizaciónAhora, liderada por migrantes de toda la región.

iv. Desafíos

Aunque las organizaciones entrevistadas han demostrado la capacidad de adaptar rápidamente su trabajo y la prestación de asistencia al exigente escenario impuesto por la pandemia, el proceso no ha estado exento de desafíos. Además de la imposibilidad de prestar asistencia en persona, algunas organizaciones dejaron de confiar en los voluntarios, debido a la preocupación por la privacidad de los datos, ya que no podían proporcionar acceso remoto a los datos de los migrantes y refugiados. En algunos casos, la falta de asistencia en persona dificultó la creación de un entorno de confianza, clave para el trabajo de los trabajadores sociales y los profesionales que prestan apoyo en materia de salud mental.

Estos múltiples retos en la prestación de servicios también afectan a la salud mental y al bienestar del personal y los voluntarios de las organizaciones de la sociedad civil. La falta de un horario de trabajo fijo y las crecientes exigencias han afectado a la vida familiar y han creado una percepción de “trabajo interminable”. Tal y como comentó una organización religiosa de Brasilia: “el trabajo humanitario es muy exigente para el personal implicado. A menudo requiere una dedicación a tiempo completo”. En respuesta, la organización está tratando de implementar actividades de “cuidado a los cuidadores” y mejorar la remuneración del personal. Al menos siete de las organizaciones entrevistadas informaron de un aumento de los problemas de salud mental y de la presión psicológica sobre el equipo. Como mencionó un entrevistado en São Paulo, los migrantes enviaban fotos de sus neveras vacías al personal, lo que creaba una sensación de impotencia entre el equipo.

Un segundo reto señalado por los entrevistados es la necesidad de pasar de la asistencia de emergencia a la integración a largo plazo y a las soluciones duraderas (véase el apartado 5.1.3). En palabras de un miembro del personal de una organización religiosa en Boa Vista:

“Tenemos que pensar en estructurar nuestro trabajo hacia soluciones duraderas. Por ejemplo, acompañando a las familias durante un largo periodo de tiempo, ayudándolas a recuperar su dignidad y a ser autosuficientes. La ayuda suele ser limitada en el tiempo y nadie quiere ser una persona dependiente el resto de su vida.”

(Personal de una organización religiosa en Boa Vista)

Por último, varias organizaciones, especialmente las situadas en la frontera norte, expresaron su preocupación por la capacidad de las OSC para hacer frente al importante aumento previsto de los cruces fronterizos una vez que se reabran las fronteras. Ahora más que nunca, se necesita una respuesta sólida, organizada y coherente a las necesidades humanitarias de quienes necesitan protección humanitaria o para refugiados.

5.1.3 Recomendaciones de políticas

Como se ha documentado anteriormente (Vera Espinoza et al, próxima publicación), y se ha confirmado en esta investigación, las OSC —y otros agentes no estatales como las OI— desempeñan un papel complementario con relación al estado brasileño en lo que respecta a la atención de las necesidades básicas y la integración socioeconómica de los migrantes y otras poblaciones vulnerables. Este apartado resume las principales recomendaciones de política, especialmente en relación con las carencias en la aplicación de las políticas y con la forma en que los gobiernos pueden involucrar al tercer sector para apoyar y ampliar su trabajo en favor de la integración de los migrantes y los refugiados en la sociedad brasileña.

i. La necesidad de reforzar la coherencia entre las políticas y las prácticas.

Brasil ha sido aclamado internacionalmente como líder y modelo de protección de los refugiados en Sudamérica (véase el apartado 4.1) y la Nueva Ley de Migración de 2017, como se mencionó anteriormente, se centra en los principios de protección de los derechos humanos y la no discriminación. Sin embargo, nuestros entrevistados señalaron unánimemente la falta de coherencia entre las políticas y la práctica, dado que no hay políticas nacionales ni recursos financieros disponibles para implementar estas leyes. Estas carencias en la aplicación de las políticas no solo limitan las perspectivas de integración socioeconómica y cohesión social de los migrantes, sino que también han provocado un preocupante grado de inercia institucional por parte del estado, imponiendo así una pesada carga a las OSC. Esto se ha traducido en la adopción de mecanismos legales ad hoc creados para la admisión y el asentamiento de las poblaciones en situación de movilidad, con poca articulación con otras políticas socioeconómicas intersectoriales. Como dijo uno de nuestros entrevistados:

“La falta de protagonismo del gobierno no es nueva (...) permiten que la gente entre en Brasil y pida asilo. La retórica del gobierno es que ‘tenemos las fronteras abiertas, les permitimos estar aquí, les proporcionamos documentación’. Y como, según la Constitución, los migrantes tienen derecho a acceder a los servicios de salud y educación como cualquier otro ciudadano brasileño (...) el gobierno utiliza esto para decir que está haciendo un buen trabajo, pero en cuestión de alojamiento, acceso al trabajo, formación lingüística, etc., todo lo hacen las OSC.”

(Representante de una ONG en São Paulo)

Durante el gobierno de Jair Bolsonaro (2019-actualidad), los valores progresistas de estas políticas han sido cuestionados repetidamente en favor de políticas populistas y nacionalistas. Bolsonaro no solo retiró al país del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular, sino que la retórica, las políticas y las prácticas de su gobierno están más en línea con el Estatuto del Extranjero de la época de la dictadura, que instrumentalizaba a los migrantes como una amenaza para la seguridad nacional (Zapata & Tapia, próxima publicación).

En este contexto, alegando los riesgos asociados a la pandemia, el gobierno cerró las fronteras del país mediante una serie de ordenanzas que parecen discriminar explícitamente a los venezolanos. Si bien desde julio de 2020 se habían levantado las restricciones de entrada para las personas que acceden al país por vía aérea, aun se mantienen las restricciones, por tiempo indeterminado, para las personas provenientes de Venezuela por cualquier medio de transporte. Son especialmente preocupantes los precedentes que sientan estos instrumentos y sus consecuencias a largo plazo en la gestión que hace el país de este y otros flujos migratorios “indeseables”.

ii. Abordar las carencias en la gobernanza local de la migración que limitan las oportunidades de integración.

Una segunda recomendación importante de las OSC de todo el país tiene relación con el tratamiento de cuestiones que afectan directamente la vida cotidiana de los migrantes, así como con las políticas y los factores estructurales que se sabe que promueven su integración a medio y largo plazo. Por un lado, se planteó la preocupación por el aumento de los niveles de xenofobia y la necesidad urgente de una campaña nacional de concienciación pública contra la discriminación, para dar visibilidad a la causa de los migrantes y educar a la sociedad sobre los beneficios de la migración, cuestiones que son fundamentales para la nueva ley de migración del país. Por otro lado, los entrevistados señalaron la necesidad de simplificar los procesos de reconocimiento de las cualificaciones de los migrantes (convalidación de los títulos universitarios extranjeros), de escuchar las necesidades y experiencias de estas personas y de incentivar a las empresas a contratar inmigrantes. En resumen, los entrevistados sugirieron la necesidad de aumentar el conocimiento de las comunidades locales sobre los beneficios potenciales de aumentar los niveles de diversidad étnica y racial:



La sociedad brasileña debe entender que los migrantes están aquí para ayudar (...) la integración de los migrantes no se producirá a través de la Policía Federal, ni del Comité Nacional para los Refugiados (CONARE), sino a través de las acciones del pueblo brasileño.”

(Representante de una organización dirigida por migrantes en São Paulo)

Un elemento clave de esta recomendación es abordar el desconocimiento generalizado del aparato público del estado sobre las particularidades y los derechos de las poblaciones de migrantes y refugiados. Esto se puede hacer aprovechando los conocimientos de las OSC para impartir formación a los funcionarios públicos, especialmente en materia de salud, educación, vivienda y otros servicios sociales.

Los entrevistados también hicieron hincapié en la necesidad de mejorar la coordinación entre los diferentes niveles de gobierno (local, estatal y federal) y otras partes interesadas, para poder responder adecuadamente a los desafíos, tal vez creando un grupo de trabajo multinivel, como se establece en la Nueva Ley⁹ de Migración. En palabras de un entrevistado:

“Las ciudades y los estados no tienen una respuesta coordinada, que también difiere de la del nivel nacional. Pero, en general, creo que uno de los principales retos es el reconocimiento de los migrantes como sujetos de derechos independientemente de su nacionalidad. Creo que sigue faltando el reconocimiento por parte del sector público de que los migrantes y los refugiados también pueden acceder al sistema de protección social. Así que, en algunas ciudades, los migrantes tienen dificultades para acceder a esos derechos y servicios que no están pensados solo para los brasileños.”

(Representante de una organización religiosa en Porto Alegre)

Sin embargo, para abordar estas deficiencias es necesario tener en cuenta las diferencias regionales y locales en todo el país, incluidos los distintos niveles de los mecanismos de recepción de migrantes, infraestructuras públicas y dinámicas socioeconómicas.

iii. Fomentar los espacios de interacción entre el estado y las OSC.

Otra recomendación importante tiene que ver con la mejora de las actitudes del gobierno actual hacia las OSC y su urgente necesidad de apoyo. Se pidió que el gobierno redujera el «ambiente generalmente hostil» hacia la sociedad civil y reconociera que ha estado haciendo gran parte del trabajo duro en cuando a la ejecución de políticas, asumiendo a menudo responsabilidades que pertenecen al estado. En palabras de dos entrevistados:

“Solemos decir que es importante no eximir al estado de sus obligaciones. Es una posición muy cómoda dejar que las organizaciones de la sociedad civil se encarguen de todo. Por eso, necesitamos un mayor trabajo de defensa política: no podemos limitarnos a responder a las emergencias, sino que tenemos que exigir soluciones duraderas a las autoridades públicas [...] Tenemos una ley nacional, pero no hay capacidad de aplicación en los estados y municipios, donde realmente se desarrolla la vida.”

(Representante de una organización religiosa en Brasilia)

“Tengo la sensación de que nuestros esfuerzos como sociedad civil solo son un simulacro de incendio, que no resolvemos realmente los problemas. Eso es porque no hay políticas públicas: apenas logramos garantizar la supervivencia de la gente.”

(Representante de una organización religiosa con sede en Roraima)

Algunas ideas para apoyar el trabajo de las OSC incluyen la creación de un fondo de ayuda financiera permanente y el ofrecimiento de espacios de oficina, ya que mantener estos espacios, especialmente en las grandes ciudades, supone una carga para los presupuestos. También sugirieron ampliar las asociaciones con las ONG y otras partes interesadas a través de convocatorias de asociaciones público-privadas o gubernamentales para la presentación de propuestas para atender adecuadamente a los migrantes y refugiados. Esto también incluye la apertura o el mantenimiento de espacios de diálogo, para garantizar que las OSC tengan voz en el desarrollo de políticas públicas basadas en las pruebas que respeten los derechos de los migrantes.

Entre las buenas prácticas que podrían replicarse se encuentran el espacio que la sociedad civil tiene en el CONARE – órgano tripartito, así como los comités estatales que reúnen a diversas OSC y actores estatales, como los Comités de Atención a Migrantes, Refugiados, Apátridas y Víctimas de Trata (COMITRATE) que existen en varios estados del país (ACNUR 2021; Ministério da Justiça 2021).

iv. Aumentar la representación y la participación de los migrantes en la toma de decisiones.

La última recomendación de política formulada por las OSC se refiere a la puesta en práctica de las disposiciones de la nueva Ley de Migración con respecto a la participación de los migrantes en la vida pública. Si bien la ley no extiende el derecho de voto a los inmigrantes, garantiza su derecho y promueve su participación en el «diálogo social para la formulación, implementación y evaluación de las políticas migratorias» (Apartado II, XIII). En este sentido, los entrevistados destacaron acciones clave como escuchar a los propios refugiados e inmigrantes, especialmente a las organizaciones dirigidas por migrantes, poner a su disposición más recursos y difundir su papel positivo en la sociedad. También se hizo un llamado para aumentar formalmente su participación en la toma de decisiones, por ejemplo, involucrando o contratando localmente a líderes comunitarios migrantes de diferentes comunidades (haitianos, venezolanos, cubanos, senegaleses, etc.), para que representaran a cada comunidad y potenciaron el impacto de las políticas públicas. Una buena práctica en este ámbito es el Consejo Municipal de Inmigrantes (CMI) de São Paulo, un órgano consultivo con representación paritaria entre funcionarios públicos y organizaciones de la sociedad civil, incluidos los migrantes y sus organizaciones, encargado de formular, aplicar y supervisar la política municipal para la población migrante de 2016 (Prefeitura de São Paulo 2021).

⁹ Ley 13.445/2017, artículo 120: “La Política Nacional sobre Migración, Refugio y Apatridia tendrá el propósito de coordinar y articular las acciones sectoriales implementadas por el poder ejecutivo federal en cooperación con los estados, el distrito federal y los municipios, con la participación de organizaciones de la sociedad civil, organismos internacionales y entidades privadas”.

5.2 Hallazgos sobre India

5.2.1 Desafíos a los que se enfrentan los migrantes durante la pandemia

i. Graves repercusiones en los medios de subsistencia

La situación laboral y la duración de la residencia en una región concreta determinaron el nivel de los retos a los que se enfrentaron los migrantes en la pandemia de COVID-19 en India, ya que las vulnerabilidades preexistentes se vieron exacerbadas. Las pérdidas repentinas de empleo fueron algunos de los principales retos a los que se enfrentaron los migrantes y que repercutieron directamente en sus medios de vida. Pero no sólo las pérdidas de empleo, sino también el impago de los salarios y de los atrasos hicieron que los migrantes no pudieran pagar el alquiler y se quedaran sin hogar. Muchos empleadores no proporcionaron nada de información ni asistencia. En palabras de un representante de una ONG: “imagine perder su trabajo y su vivienda al mismo tiempo”. La falta de información provocó el pánico y el miedo entre la gente.

Al principio, durante el confinamiento, pudieron arreglárselas con los escasos ahorros que tenían. A medida que este periodo se prolongaba, muchos intentaron volver a casa, pero no tenían ni los recursos ni el transporte que necesitaban. Incluso los que consiguieron volver a su lugar de origen se enfrentaron a problemas relacionados con la cuarentena. Mientras que a algunos migrantes se les mantuvo en centros de cuarentena con instalaciones mínimas durante un periodo de 14 a 20 días en zonas rurales, otros simplemente desaparecieron con la ayuda de sus familiares y se mantuvieron ocultos, ya que estar en cuarentena no se consideraba algo positivo. Además, los que regresaban a su lugar de origen acababan cultivando o vendiendo verduras, ya que las zonas rurales no ofrecen muchas oportunidades. El hambre y la falta de alimentos supusieron otro reto, con los consiguientes problemas de salud. Los migrantes se enfrentaron al reto de regresar en medio de una pandemia y valerse por sí mismos, cuidar de la familia, cubrir las necesidades diarias, encontrar transporte y dinero para volver a casa. La brutalidad de la policía local sigue siendo uno de los recuerdos traumáticos de la pandemia. En algunos casos, los migrantes también sufrieron crisis mentales. Las incertidumbres sobre el futuro se cernían sobre ellos.

No existía ningún mecanismo de apoyo para los migrantes que regresaban. Los migrantes que regresaban del Golfo a Telangana se gastaron una cantidad desorbitada de dinero en vuelos chárter y centros de cuarentena para volver. La pandemia afectó especialmente a la población de refugiados en India. En comparación con la población general, un número mucho mayor de refugiados sufre depresión, Trastorno de Estrés Posttraumático (TEPT) o esquizofrenia, debido a las experiencias traumáticas de la guerra y la persecución sistemática. Para muchos, la pandemia ha supuesto la interrupción del acceso al apoyo psicosocial, la atención psiquiátrica y los medicamentos. Aparte de los problemas de subsistencia, vivienda y atención sanitaria, la suspensión temporal de las actividades de determinación de la condición de refugiado de ACNUR durante el confinamiento afectó gravemente a los solicitantes de asilo cuyos casos siguen pendientes, así como a los que todavía no se han registrado en ACNUR. La comunidad de refugiados ha respondido a estos desafíos de diferentes maneras: mientras que algunos decidieron regresar a su país de origen debido a las mayores dificultades para asegurar una vida digna en India, muchos decidieron quedarse y esperar a que sus casos fueran procesados por ACNUR. Un entrevistado dijo que “el voto de India para la adopción del Pacto Mundial sobre los Refugiados (GCR) en diciembre de 2018 es un avance prometedor”.

En el caso de los migrantes internacionales/retornados, la pérdida de puestos de trabajo ha repercutido directamente en las remesas, afectando a los ingresos individuales y a la renta nacional. Al interrumpirse el transporte, los migrantes no pudieron enviar dinero a sus familias en sus países de origen. Esto ha agravado la situación económica y de subsistencia de los migrantes, así como de sus familias que dependían de ellos.

ii. Vulnerabilidades socioeconómicas

Entre los grupos más vulnerables identificados por nuestros entrevistados se encuentran los ancianos, las mujeres, los niños y la comunidad transgénero. Las mujeres han sufrido tanto mental como físicamente debido a la violencia doméstica. En el caso de los niños, su educación se vio afectada, ya que las escuelas cerraron y el acceso a la enseñanza en línea no resultó posible para todos ellos. Como compartieron los representantes de dos organizaciones: “si se observa el patrón de los trabajadores migrantes en India, pertenecen a los dalits, adivasis, musulmanes y a las otras clases atrasadas. Este grupo social también representa el mayor número de población en India. Son ellos los que tienen dificultades para volver a su país y encontrar trabajo”. Entre los trabajadores migrantes, las mujeres suelen trabajar en sectores como el de la confección, la hostelería, la belleza, las plantaciones o la construcción, todas ellas muy afectadas por la pandemia. También se enfrentan a amenazas adicionales, como los abusos sexuales y físicos, y los problemas de seguridad en los centros de cuarentena. Los menores eran más vulnerables debido al problema de la falta de inmunización y de alimentos nutritivos, ya que los *anganwadis*¹⁰ estaban cerrados durante el confinamiento. Una de las principales preocupaciones fue la falta de acceso a los centros de salud públicos, especialmente para las mujeres embarazadas y los ancianos. Muchos ancianos también trabajan como obreros para ganarse la vida y mantenerse con un salario diario. Con la repentina imposición del confinamiento, los ancianos se quedaron sin remuneración ni ahorros. Además, estas personas mayores corrían un mayor riesgo de contraer la COVID-19.

Para la comunidad transgénero, la fuente de ingresos más importante es lo que reciben en las ceremonias de boda, los nacimientos y otras reuniones sociales. Debido al confinamiento y al distanciamiento social, su fuente de ingresos se vio muy afectada. Además, también pasaron hambre. Como muchas de estas personas transgénero no tenían documentos válidos, no podían recibir las ayudas que ofrecía el gobierno. Muchos grupos étnicos de India trabajan en el campo de la cultura y la música. Por ejemplo, los *manganiars* de Rajastán llevan siglos interpretando su música y ahora han visto limitada su capacidad de desplazarse y actuar, lo que ha afectado a su medio de vida. Además, los solicitantes de asilo y refugiados de Chin denunciaron un aumento del comportamiento xenófobo por parte de la comunidad local.

iii. Respuestas de los migrantes a la pandemia

Los propios migrantes están encontrando formas de responder a esta crisis. Los migrantes han intentado volver a casa para poder mantenerse. Algunos de ellos, que vendían verduras o manejaban un rickshaw, han puesto en marcha empresas similares. Las mujeres, en particular, participan activamente en la formación de grupos de autoayuda y otras iniciativas dirigidas por la comunidad. Algunos colectivos como los grupos de autoayuda, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes y los grupos religiosos han tomado la iniciativa de ayudar a los migrantes vulnerables a pesar de los múltiples problemas de movilidad, riesgo de infección, estrés financiero, etc. Algunos migrantes se han dedicado incluso a la agricultura y la pesca. Entre las medidas para hacer frente a la situación se incluye pedir dinero prestado a los prestamistas locales con un tipo de interés muy elevado. Un entrevistado afirmó que

“los migrantes son personas trabajadoras que no dependen de la caridad de nadie, no quieren depender de la caridad, pero se ven obligadas a hacerlo.”

(Representante de una ONG en Mumbai, India)

Sin embargo, en otros casos, los migrantes dependían en gran medida de la ayuda del gobierno, como raciones, servicios médicos y otros artículos gratuitos o muy subvencionados. Todos los entrevistados hicieron eco de que un sentimiento —la desesperanza y la sensación de no contar con el apoyo de sus empleadores y, sobre todo, del gobierno— les impide regresar a las grandes ciudades. Aunque la pandemia ha afectado tanto a la India urbana como a la rural, en las aldeas los migrantes tienen ciertos tipos de sistema de apoyo, o una red de familiares que les ayudaría en caso de que se encontraran en una situación de extrema necesidad.

¹⁰Anganwadi es una palabra hindi que puede traducirse como “Centro de atención a la infancia”.

5.2.2 Papel de las organizaciones del tercer sector: lecciones aprendidas y buenas prácticas

Las condiciones críticas de desamparo social son la razón por la que surgieron los esfuerzos titánicos del tercer sector de India en el contexto de la COVID-19. La pandemia y los confinamientos resultantes en India fueron las medidas reactivas adoptadas por los gobiernos para frenar la propagación de la pandemia que desencadenó importantes crisis a gran escala para los migrantes y sus familias, como se ha señalado anteriormente. Los esfuerzos por hacer frente a las inesperadas amenazas sanitarias de la COVID-19 provocaron el desplazamiento de millones de personas, muchas de las cuales ya se encontraban en una situación marginal y eran migrantes. Cuando estos migrantes se encontraron ante el gran reto de cómo sobrevivir en lo inmediato y a corto plazo, el tercer sector estuvo a la altura de los inmensos retos sociales y operativos, ya que rápidamente aumentó y amplió las operaciones sobre el terreno para ofrecer alimentos, refugio, kits sanitarios y orientación a millones de migrantes en apuros en medio del caos (Gobierno ET 2020)

i. La contribución de las OSC para superar algunos de los retos de los migrantes

Para ayudar a los migrantes, muchas organizaciones fueron más allá de su capacidad, a pesar de la amenaza de la COVID-19. Las autorizaciones de movilidad limitada no han impedido a estas organizaciones realizar su trabajo. Según los entrevistados, su organización trató de proporcionar artículos de primera necesidad a los migrantes. Las organizaciones distribuyeron canastas de alimentos tanto cocinados como crudos a los migrantes. Los canastas de alimentos, por lo general, incluían arroz, trigo, legumbres, pasta de dientes, cebollas y patatas en diferentes cantidades, según las organizaciones. Los entrevistados revelan que el programa gubernamental de distribución gratuita de alimentos fue beneficioso durante el confinamiento. También fue muy positiva la apertura de los almacenes de Food Cooperation of India para que las organizaciones ayudaran a los organismos gubernamentales a distribuir los alimentos, lo que permitió acceder a los alimentos con un menor coste de distribución. Uno de los entrevistados afirmó que su organización suministró alimentos y agua a los migrantes y sus familias durante 21 días. Las organizaciones distribuyeron lápices, borradores y libros para dibujar entre los menores.

Algunas organizaciones se centraron en la distribución de mascarillas y desinfectantes a los migrantes y a los centros de cuarentena, respectivamente. También difundieron videos breves en las redes sociales sobre cómo utilizar los desinfectantes y otras pautas para sobrellevar la pandemia. Las OSC también organizaron campamentos para ofrecer información y programas de concienciación sanitaria. Varios entrevistados confirmaron que su organización realizaba pruebas de detección de COVID-19, además de prestar ayuda para obtener autorizaciones de circulación para los migrantes. Una organización potenciaba la motivación de las personas mediante la concesión del «Premio Karmveer Yoddha» a aquellos que habían contribuido de alguna manera durante la pandemia en toda India. Algunas organizaciones ayudaron específicamente a los migrantes indocumentados que se quedaron sin acceso a los servicios gubernamentales. También se prestaron servicios médicos inmediatos a los migrantes que lo necesitaban, con la ayuda de algunas OSC. Una organización contrató a trabajadores migrantes retornados para que limpiaran los ríos y pozos de las aldeas a cambio de canastas de comida y raciones durante semanas. Otra organización puso en marcha el plan «Pavitra Buddha», en el que la gente donaba alimentos sobrantes y las cosas que ya no utilizaba (comida, ropa o cualquier otra cosa), que se distribuían entre los migrantes y otros trabajadores necesitados.

En el caso de la migración retornada del Golfo, una OSC ayudó a desarrollar la confianza entre los trabajadores para que permanecieran en el Golfo y no se marcharan por pánico, y también para que siguieran los protocolos internacionales. Otra OSC también ayudó a los trabajadores indocumentados en los países de destino a someterse a pruebas y les prestó ayuda para la repatriación. Cuando el gobierno indio proclamó la implantación de la misión Vande Bharat para la repatriación, la OSC prestó ayuda para la repatriación de los trabajadores migrantes en lo que respecta a la obtención de los billetes de avión y la prestación de asistencia financiera. Cuando los migrantes decidieron regresar a pie a sus ciudades de origen, las ONG les proporcionaron agua, comprimidos multivitamínicos, comprimidos de proteínas, compresas para las mujeres, mascarillas, guantes, etc. También se distribuyeron canastas de alimentos básicos: arroz, cereales y pan.

Las organizaciones pusieron en marcha una línea de ayuda para que los solicitantes de asilo y los refugiados obtuvieran asistencia jurídica. Elaboraron materiales de comunicación sobre la prevención de la COVID-19, incluyendo información sobre las líneas de ayuda del gobierno y los hospitales, en los diferentes idiomas de los refugiados, y se mantuvieron en contacto con los líderes de la comunidad para difundir mensajes importantes sobre las órdenes del gobierno, entre otros. Las organizaciones también pusieron en contacto a los refugiados y solicitantes de asilo con diversas ONG locales — en función de su ubicación— para que les prestaran servicios esenciales y tuvieran acceso a artículos de primera necesidad. Las respectivas organizaciones pusieron en contacto a las mujeres que lo necesitaban con organizaciones que ofrecen ayuda a las víctimas de la violencia doméstica. Y, lo que es más importante, las organizaciones también presentaron los casos vulnerables a ACNUR y sus organizaciones asociadas para garantizar que estas personas no quedaran al margen de la red de seguridad. El trabajo a distancia de ACNUR y sus organizaciones asociadas supone que las personas vulnerables no puedan acceder a los servicios con rapidez. Los refugiados no gozan de altos índices de integración e inclusión en India, y la pandemia no ha hecho más que empeorar la situación, ya que los refugiados luchan por conseguir menos puestos de trabajo en el sector informal. Uno de los entrevistados destacó que

“como actor clave en la región del sur de Asia, India debería desempeñar un papel activo en la creación y el desarrollo del mecanismo regional para la protección de los refugiados y las soluciones duraderas, tal y como prevé el Pacto Mundial para los Refugiados”.

(Representante de una ONG en India).

ii. Desafíos de las OSC

En cuanto a las carencias, la falta de comunicación con las autoridades superiores y la falta de fondos y recursos fueron los principales problemas. Las organizaciones mencionaron la política de los bancos de votos por parte de algunos políticos locales, corporaciones, etc. El acceso a la asistencia de salud era deficiente. La imposibilidad de viajar a zonas remotas también fue un problema. Sin embargo, algunas organizaciones creen que, con una planificación y gestión adecuadas, se pueden superar algunos de los retos derivados de la falta de recursos y financiamiento.

El reconocimiento de las organizaciones y de su trabajo por parte del gobierno fue un gran reto en el Golfo. Sin la autorización, el apoyo y la ayuda del gobierno, es difícil ayudar a los trabajadores migrantes. Además, el gobierno indio no proporcionó ninguna ayuda financiera a los trabajadores migrantes. La misión de repatriación iniciada por el gobierno de India fue una misión que tenían que pagar los propios migrantes. Los trabajadores migrantes atrapados tenían que sufragar los gastos de viaje y de estancia durante 14 días en un centro de cuarentena. Sin embargo, esos migrantes ya necesitaban urgentemente la ayuda del gobierno, por lo que no podían hacer frente también al coste de sus billetes de avión y de los centros de aislamiento. Solo unos cuantos pudieron permitirse el regreso.

iii. Buenas prácticas

En cuanto a las buenas prácticas, algunos entrevistados destacaron que el gobierno de Kerala prometió una cantidad determinada de rupias. 5.000 para los que no pudieran reanudar su trabajo durante la pandemia. También prometieron una cantidad de rupias. 10.000 para los familiares de los fallecidos por la COVID-19. Además, también se anunciaron ayudas para la reintegración de los trabajadores migrantes retornados mediante préstamos de reintegración. Una de las buenas prácticas mencionadas por nuestros entrevistados fue la del Departamento de Trabajo y Competencias del gobierno de Kerala que introdujo el AAWAZ, un programa de seguros para trabajadores visitantes. Además, una ONG tiene el objetivo de presionar al gobierno para que cree “tarjetas de identificación laboral” para todos los trabajadores, con el fin de que se les reconozca en la sociedad. También tiene previsto construir un espacio recreativo para los menores en las obras. Además, se les enseñará higiene básica y el valor del ahorro, entre otras competencias. El gobierno de Maharashtra ha construido enormes casas de acogida que acogen a entre 3.000 y 5.000 migrantes a la vez. Se ofrece comida, asistencia médica y agua. Junto a las camas hay puntos de carga para los móviles. Además, se entregaron artículos deportivos para mejorar la calidad de vida en los hogares de acogida.

A modo de buena práctica, una organización implantó una política de «Servicio de Ayuda de Emergencia» por la que facilitaba el número de atención al cliente para la población del magistrado local del distrito en Bihar. El número tenía el objetivo de que aquellas personas enfrentando dificultades durante la pandemia recibieran la ayuda prestada por el gobierno local, como atención en salud, alimentos, etc. Esta política fue muy eficaz y proporcionó una gran ayuda a 2 500 000 migrantes que cruzaron la “frontera de Karmnasa” en Bihar.

Otra OSC afirmó que el gobierno había adoptado muchas disposiciones sobre el papel, pero que en realidad no se estaba haciendo demasiado. Un encuestado mencionó que «si no fuera por las ONG y el trabajo que realizan, la situación de los migrantes habría sido aún peor». Una organización dijo que las directrices publicadas por la administración local eran buenas. Los controles realizados por la policía local fueron muy útiles, ya que imputaron a quienes no llevaban mascarillas e ignoraban las directrices gubernamentales. Obligaron a la gente a seguir las normas. También se destacó la utilidad de los consejos sanitarios de los hospitales.

iv. Colaboración, alianzas y financiamiento

En cuanto a las asociaciones y colaboraciones, una organización afirmó que colaboraba con el parlamento internacional de Kerala. Un grupo comunitario creó una “línea telefónica especial” para apoyar a los trabajadores migrantes. Además, la organización trabajó con la organización establecida por el gobierno, “Norka Roots”, el parlamento internacional de Kerala y sus grupos comunitarios llegaron a las personas para proporcionarles asistencia médica y alimentos. Además, se asoció con el “Foro de Migrantes en Asia”. Un gran número de organizaciones de la diáspora participan en este foro, con diásporas procedentes de diversos ámbitos (abogados, medios de comunicación, empresarios, encargados de selección de personal).

Algunas organizaciones afirmaron que se había colaborado con varias ONG locales/sobre el terreno en varias ciudades. Algunas organizaciones habían colaborado con el gobierno local para prestar asistencia y, a cambio, obtuvieron permisos de circulación para realizar sus funciones. Una organización colaboró con una ONG más grande de ámbito nacional y también recibió ayuda en materia de recursos.

Además, algunas aplicaciones como WhatsApp ayudaron a que nacieran colaboraciones y a evitar el solapamiento del trabajo en la misma región. Algunos colectivos, como los grupos de autoayuda, los grupos de mujeres, los grupos de jóvenes y los grupos religiosos, tomaron la iniciativa de ayudar a los migrantes vulnerables, a pesar de la amenaza de infección y otros múltiples desafíos.

En cuanto al financiamiento, los entrevistados ofrecieron respuestas contradictorias. Algunos mencionaron que sus organizaciones se enfrentaron a una enorme reducción del financiamiento, ya que sus fuentes de financiamiento también se vieron afectadas por la pandemia. Por otro lado, algunas organizaciones vieron un aumento en su financiamiento, ya que establecieron nuevas redes y fuentes de recursos durante la pandemia. Otras organizaciones no observaron ningún cambio significativo en sus fuentes de ingresos porque se repartieron las responsabilidades. En un caso, contar con una cuenta verificada en Twitter (con verificación azul) ayudó a dar legitimidad a la organización y, por tanto, a aumentar la confianza entre las partes interesadas, lo que condujo a un aumento del financiamiento

5.2.3 Recomendaciones de política

Resulta evidente que la pandemia ha puesto de manifiesto las carencias y problemas existentes desde hace tiempo en la infraestructura social de India, que se han exacerbado en gran medida durante la pandemia, afectando en mayor medida a los migrantes y a los sectores informales poco cualificados. Los esfuerzos del tercer sector para apoyar a este sector de la población han puesto de manifiesto ciertas carencias en las políticas nacionales y estatales existentes que deben abordarse urgentemente si se quiere evitar una crisis de este tipo en el futuro.

i. Regularizaciones y documentación laboral

Como prioridad, la pandemia ha servido de evidencia inequívoca de que la informalidad laboral debe ser regularizada. Muchos trabajadores vienen de otras partes del país, por lo que trabajan en las grandes ciudades e industrias sin la protección de la debida documentación. Al no estar registrados ni reconocidos, viven y trabajan efectivamente como ciudadanos indocumentados en su propio país y, a menudo, tampoco saben hablar o leer ni escribir en las lenguas locales. Esto les deja sin acceso a los servicios sociales y en deuda con sus empleadores para obtener los medios básicos de supervivencia. En parte, esto también se debe a las prácticas de contratación de los contratistas, que contratan de manera informal y sin contrato, de modo que no hay ningún rastro financiero ni de otro tipo que ampare o registre a la mano de obra migrante. El registro de la mano de obra migrante, realizado mediante una política que responsabilice al sector privado y a sus agentes ante el gobierno, ayudaría a asignar identidades oficiales para todos los migrantes.

Las políticas para proporcionar la debida documentación también pueden vincularse a prácticas legislativas y políticas laborales que conduzcan a mejorar las condiciones de los migrantes. Un hecho comprobado una y otra vez es que la mano de obra migrante informal suele trabajar sin contrato ni protección en materia de salud y seguridad. Estos trabajadores suelen vivir en asentamientos informales, sin acceso a servicios sanitarios, agua potable y otros servicios básicos. Las organizaciones del tercer sector insistieron repetidamente en la necesidad de tener una vivienda de calidad, y el acceso a la atención en salud y educación para los migrantes y sus familias. También destacaron cómo el debido registro de los trabajadores podría vincularse

a las buenas prácticas de los empleadores y el gobierno para dignificar la vida de los trabajadores migrantes. Una organización mencionó que, en lugar de financiar los viajes, la alimentación y la salud de los migrantes, los gobiernos de los estados afectados deberían haber proporcionado alimentos e instalaciones básicas en su propia ciudad de trabajo. Esto habría evitado en gran medida la propagación de la enfermedad y el caos repentino.

ii. Aumento de la comunicación entre el gobierno y las OSC

No se puede subestimar la importancia de las OSC a la hora de combinar el trabajo sobre el terreno con la defensa de derechos. No solo actúan en respuesta a la crisis, sino que también tienen una base de conocimientos sobre las necesidades, las vulnerabilidades y los riesgos que experimentan los migrantes, que constituyen la mayor parte de la mano de obra del país y que también aportan flujos de remesas clave cuando trabajan en el extranjero. Los esfuerzos realizados por el tercer sector para responder a la crisis surgida en la pandemia ofrecen una prueba del papel vital que desempeñan a nivel local, nacional e internacional. Las OSC, en toda su diversidad, deben ser reconocidas como actores clave en la integración e inclusión de todos los ciudadanos de India, independientemente de su clase social, casta o religión.

En cuanto a la colaboración de las OSC con el gobierno, se sugirió que este debería asociarse más con las ONG locales y sobre el terreno. Es necesario que se reconozca el trabajo de las ONG locales y que se cree un portal en el que las ONG locales puedan mostrar su trabajo. Algunas organizaciones sugieren que el gobierno podría involucrar a la sociedad civil para concienciar sobre las medidas de seguridad y los mitos que rodean a la vacuna contra la COVID-19.

Se sugirió designar a proveedores de formación para migrantes y a organizaciones ONG que colaboren con los bancos para agilizar la tramitación de las solicitudes de préstamos de los migrantes. Las OSC también pueden realizar encuestas entre los trabajadores sexuales, los transexuales, las mujeres divorciadas, las personas mayores y otros grupos vulnerables para evaluar si reciben o no alimentos y servicios esenciales. El tercer sector debe empoderar a las personas y presionar al gobierno para que haga un trabajo más eficaz. Como afirmó uno de los entrevistados:



Nosotros (las OSC) debemos trabajar como catalizadores y asegurarnos de que el gobierno trabaje. Nuestro trabajo no es sustituir al gobierno, ni hacer cosas que el gobierno debería hacer. Podemos actuar temporalmente para mostrar al gobierno cómo hacer las cosas mejor. Poner en marcha un cambio a gran escala es papel del gobierno, nosotros en cambio deberíamos trabajar con el gobierno y sus organismos para ayudar a la gente.

(Representante de una ONG en Delhi, India)

Deberían formarse Juntas de Alquiler de Viviendas para evitar los desalojos forzosos y notificar a las barriadas marginales. Hay que garantizar Esquemas de Seguridad Social (SSS, por sus siglas en inglés) para los trabajadores. Hay que conversar con las partes interesadas sobre los “datos” de los migrantes. Interseccionalmente, algunos grupos, como las mujeres solteras, los transexuales o los sintecho, son más vulnerables y, por tanto, se necesitan mecanismos de seguridad social específicos para ellos. A este respecto, debería contarse con la ayuda de las OSC, ya que tienen oídos en el terreno. El gobierno debería crear organismos y redes con las OSC para identificar a las personas vulnerables.

Algunos entrevistados señalaron que se centrarían en la investigación y darían prioridad al trabajo sobre el coste de la vida, el transporte y los costes de la vivienda, y asesorarían al gobierno sobre cómo responder. También intentarían definir los distintos tipos de trabajo desde el domicilio. Además, señalaron que se centrarían en la educación de las niñas y en programas de sensibilización.

iii. Abordar la integración de los migrantes

Con la ayuda del tercer sector, el gobierno debería reformular las políticas para los trabajadores migrantes internacionales/ de retorno. Las OSC pueden identificar los puestos de trabajo y los sectores que tendrían más demanda en el futuro. El gobierno debería poner en marcha un programa de recopilación de datos sobre los trabajadores migrantes que regresaron durante la pandemia. Sus competencias, experiencias y conocimientos, así como sus planes de futuro, deberían quedar reflejados en estos datos. El gobierno debería promover un mecanismo para abordar la cuestión de los trabajadores migrantes que perdieron sus puestos de trabajo y ofrecerles una compensación. También debería ofrecerse un mecanismo de apoyo a las familias. Es necesario desarrollar una política para los trabajadores migrantes en los sectores basada en los 23 objetivos consagrados del Pacto Mundial para la Migración Segura, Ordenada y Regular (2018).

Es necesario reintegrar a los migrantes en sus fuentes de sustento de una manera más humana. La pandemia ha puesto de relieve la difícil situación de los migrantes. De esta forma, irónicamente, el respeto por los migrantes ha aumentado con la pandemia. La gente ahora valora su trabajo y los considera ciudadanos iguales. Se reconoce el estrés que han sufrido los migrantes y la necesidad de motivarlos. Uno de los entrevistados sugirió que los migrantes también deben esforzarse. Por ejemplo, podrían crear pequeñas empresas en los pueblos e integrarse. En los pueblos, la gente tiene tierras, si las trabaja y utiliza su tiempo y sus recursos, tendrá buenos ingresos. Incluso si uno no tiene tierras, puede sembrar verduras y ganar algo de dinero. Las OSC también sugieren que los trabajadores migrantes tengan acceso a programas de empleo para sentirse integrados. Una de las organizaciones sugirió que se organizaran campañas de sensibilización para los migrantes en relación con diversos temas para que fueran más conscientes del contexto y se integraran en la sociedad.

iv. Nuevas funciones y responsabilidades

En cuanto a los nuevos programas, muchas organizaciones seguirán distribuyendo canastas de comida, ropa, medicinas, agua y compresas entre los migrantes. Una ONG tiene previsto poner en marcha centros comunitarios de bienestar en los pueblos, en los que las mujeres aprenderán gratuitamente competencias como la costura, y se atenderá a los niños. Otra ONG dijo que continuará con su programa de «banco de alimentos» incluso después de la pandemia. Esta organización también seguirá distribuyendo medicamentos ayurvédicos y de otros tipos para mejorar la salud de la población. Una OSC afirmó que seguirá trabajando en temas relacionados con las mujeres y concienciando sobre sus derechos, mientras que otra organización apuntó que seguirá proporcionando oportunidades de subsistencia a los trabajadores migrantes, como la limpieza del entorno o la venta de verduras, para que puedan mantenerse.



6. Conclusiones

Este estudio se ha centrado en el papel de la sociedad civil en la asistencia a los migrantes durante la pandemia de COVID-19 en dos grandes países en desarrollo: Brasil e India. Ambos países comparten ciertos rasgos, como sus vastas geografías, su poderío industrial y económico a nivel regional y sus democracias participativas, así como su larga historia de desigualdades estructurales. Sin embargo, Brasil e India difieren en cuanto a la dinámica de la movilidad y sus obligaciones con los migrantes y refugiados. Lo que queda muy claro en este análisis interregional son las diferencias existentes entre las políticas y las prácticas, que han existido durante mucho tiempo, pero que se han exacerbado considerablemente tras el estallido de la pandemia y los posteriores confinamientos.

Lo que también se pone rápidamente de manifiesto es el papel absolutamente vital que desempeñan las OSC de diversos tipos y tamaños, incluidas las organizaciones dirigidas por migrantes, para suplir estas carencias. Si, antes de la pandemia, las OSC se asociaban generalmente con actividades de asistencia y acciones de incidencia en favor de grupos minoritarios o marginales, la pandemia también ha puesto de manifiesto su inmensa flexibilidad y adaptabilidad ante la crisis.

Muchas OSC que se dedicaban a la defensa de los derechos de los migrantes transformaron su trabajo, en algunos casos casi de la noche a la mañana, para prestar asistencia de emergencia. El suministro de alimentos, la atención en salud y la asistencia jurídica, por no hablar de las necesidades personales de las masas de personas que se desplazan, como mascarillas, desinfectantes y otros artículos, se convirtieron en prioridades. También lo fue la necesidad inmediata de orientar, informar, educar y apoyar a las personas atrapadas en medio de la pandemia. El firme enfoque de las OSC hizo que tuvieran que reinventarse y responder a las necesidades de emergencia cuando sus objetivos

son, de hecho, conseguir mejoras estructurales en la sociedad. De este modo, pudieron ponerse en marcha mucho antes de que los gobiernos, tanto nacionales como locales, pudieran hacerlo.

No es de extrañar que las OSC hayan aprovechado todas las posibilidades para ampliar y mejorar su alcance. Estas asociaciones refuerzan su posición como puente útil entre los sectores público y privado.

De cara al futuro, este informe insta a los gobiernos a reconocer y apoyar el trabajo de las OSC con las personas en situación de movilidad. Han actuado como vectores de cohesión social frente a la crisis, pero hay que prestar atención a sus esfuerzos de promoción para evitar esas crisis en el futuro. La pandemia ha sacado a relucir la inmensa capacidad y las fortalezas polifacéticas de estas organizaciones, que pueden al mismo tiempo, asistir, coordinar, colaborar y representar a los migrantes. Por ello, el desarrollo de políticas nacionales e internacionales para migrantes y refugiados debe apoyar y comprometerse con la sociedad civil como socio clave en los esfuerzos por la cohesión y la inclusión social.

Aunque por el momento es imposible reflexionar sobre cómo podría ser un futuro pos-pandemia en Brasil y en India en relación con los migrantes y su situación, es importante tener en cuenta el amplio alcance, la agilidad y la relevancia de las OSC como socios de los gobiernos, tanto nacionales como locales, de otros actores no estatales y del sector privado. Las OSC son actores clave en la elaboración de los planes para el futuro. El compromiso con las OSC, tanto para aprender de sus amplias experiencias durante la pandemia como para aprovechar sus puntos fuertes, será clave en términos de esfuerzos para apoyar a los migrantes, las comunidades de acogida y una sociedad inclusiva para todos.

Anexos

Anexo 1. Ubicación y tipo de organización de los entrevistados.

Tabla 1. Entrevistas en Brasil

| Región | Ciudad (Estado) | Tipo de Organización |
|--------------|-----------------------------------|---|
| Centro-Oeste | Brasilia (Distrito Federal) | 2 organizaciones religiosas |
| | Campo Grande (Mato Grosso do Sul) | 1 organización de migrantes |
| Noreste | Feira de Santana (Bahia) | 1 ONG |
| | João Pessoa (Paraíba) | 2 organizaciones religiosas |
| Norte | Boa Vista (Roraima) | 1 ONG |
| | Manaus (Amazonas) | 3 organizaciones religiosas |
| Sureste | Belo Horizonte (Minas Gerais) | 3 ONGs |
| | Rio de Janeiro (Rio de Janeiro) | 4 organizaciones religiosas |
| | São Paulo (São Paulo) | 3 organizaciones de migrantes |
| Sur | Porto Alegre (Rio Grande do Sul) | 2 ONGs 1 organización religiosa 2 organizaciones de migrantes |

Tabla 2: Entrevistas en India

| Tipo de migración | Región | Ciudad | Tipo de Organización |
|----------------------|---------------------|------------------------------|---|
| Migración Interna | Norte | Delhi, Uttar Pradesh & Bihar | 11 ONGs 02 organizaciones de migrantes 03 organizaciones religiosas |
| | Sur Oeste | Mumbai | 2 ONGs |
| Inmigración | Norte Transnacional | Delhi | 1 ONG 2 organizaciones de migrantes |
| | Trans-nacional | Transnacional | |
| Migración de Retorno | Centro Sur | Hyderabad | 1 organización de migrantes |
| | Sur | Kerala | 3 ONGs 2 organizaciones religiosas |

Anexo 2. Guía de Entrevistas

Información sobre los participantes

- Nombre | seudónimo
- Organización
- Localidad
- Rol en la organización | Tiempo trabajando en la organización

Sección 1 | Desafíos enfrentados por migrantes durante la pandemia.

- ¿Cuáles son los principales desafíos que las comunidades migrantes y refugiadas enfrentan en Brasil/India durante la pandemia?
- ¿De qué manera la pandemia ha afectado a las condiciones de vida, bienestar e integración socioeconómica de las comunidades migrantes y refugiadas en el país (por ejemplo, con relación a salud, empleo, salud, alojamiento y otros derechos socioeconómicos)?
- ¿De qué modo la pandemia ha afectado las prácticas transnacionales/remesas de las poblaciones migrantes y refugiadas?
- ¿Cómo estos desafíos afectan a diferentes grupos en relación a otros ejes de vulnerabilidad como, por ejemplo, edad, orientación sexual, identidad de género, status migratorio, etnia, discapacidad física o psicológica?
- ¿Cómo están respondiendo los propios migrantes a estos desafíos emergentes?

Sección 2 | Papel de las Organizaciones de la Sociedad Civil: Lecciones y Buenas Prácticas

- ¿En qué medida y de qué manera ha contribuido su organización a superar algunos de los desafíos identificados (en la primera sección de la entrevista)?
- ¿Qué tipo de apoyo y asistencia su organización ha tenido disponible para a los migrantes y refugiados? [nuevos programas, ampliación de programas antiguos o flexibilización de reglas de acceso, etc.]
- ¿Qué desafíos quedan por cubrir?

- ¿Identifica alguna buena práctica o política en particular que haya surgido a nivel nacional, estatal o local durante la pandemia?
- ¿Qué nuevas alianzas, si las hay, han surgido entre las organizaciones de la sociedad civil, los grupos liderados por migrantes y otras partes interesadas (incluidos los actores estatales) para abordar las necesidades de las poblaciones migrantes durante la pandemia?
- ¿Ha establecido algunas alianzas o líneas de acción conjunta con otras organizaciones regionales durante este período?
- ¿Cómo ha afectado la crisis económico-sanitaria la capacidad de su organización para cumplir su misión?
- ¿En qué medida y de qué manera han cambiado sus fuentes de financiamiento como resultado de la pandemia?
- ¿Existen algunas medidas tomadas a nivel regional o internacional a favor de las poblaciones migrantes y refugiadas en el escenario actual que impacten las prácticas de su organización en el país?

Sección 3 | Recomendaciones y escenario actual

- ¿Cómo pueden los gobiernos colaborar con el tercer sector para apoyar y ampliar su trabajo humanitario?
- ¿Cómo cree usted que el escenario actual afectará las posibilidades de inclusión de los migrantes en el país?
- ¿Existen algunas nuevas formas de trabajo, programas y/o alianzas de colaboración que su organización considera continuar/promover durante la transición para, o durante, la post-pandemia?
- ¿Algún otro comentario?

Referencias

ACNUR (2021) Conselhos e Comitês para refugiados no Brasil. [online] Available at: <https://www.acnur.org/portugues/acnur-no-brasil/conselhos-e-comites-no-brasil/> [Accessed on 20 March 2021].

ACNUR (2020) Brasil se convierte en el país con el mayor número de refugiados venezolanos reconocidos en América Latina. [online] Available at: <https://www.acnur.org/noticias/press/2020/1/5e34af654/brasil-se-convierte-en-el-pais-con-el-mayor-numero-de-refugiados-venezolanos.html> [Accessed on 19 March 2021].

ACNUR (2020) Brazil Operation: Covid-19 Response. [online] Available at: <https://reliefweb.int/sites/reliefweb.int/files/resources/UNHCR%20Brazil%20COVID-19%20Update%20-%20August%202020.pdf> [Accessed on 19 March 2021].

Acosta, D. (2018). The National versus the Foreigner in South America: 200 Years of Migration and Citizenship Law. Cambridge: Cambridge University Press.

Acosta, D., Vera Espinoza, M. and Brumat, L. (2018) Brazil's Migration Governance: Hidden Actors, the New Law and the 2018 Presidential Elections. Migration Policy Centre (EUI) [Blog] Available at: <https://blogs.eui.eu/migrationpolicycentre/brazils-migration-governance-hidden-actors-new-law-2018-presidential-elections/> [Accessed on 23 Feb. 2021].

Alvim, R. P. (2018). Retrospectiva do Trabalho da Defensoria Pública da União na Defesa dos Direitos dos Migrantes Venezuelanos. In: Jarochinski, J.C.S. and Baeninger, R. (eds.). Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 206–216.

Avritzer, L. (2007). Sociedade Civil, Instituições Participativas e Representação: da Autorização à Legitimidade da Ação. Dados, 50(3), 443–464.

Baeninger, R. (2018). Governança das Migrações: migrações dirigidas de Venezuelanos e Venezolanas no Brasil. In: Jarochinski, J.C.S. and Baeninger, R. (eds.). Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 135–138.

Baeninger, R. and Peres, R. (2017). Migração de Crise: a migração haitiana para o Brasil. Revista Brasileira De Estudos De População, 34(1), 119–143.

BAL Global (2020) Brazil: COVID-19: Immigration deadlines resume after pandemic suspension. Berry Appleman & Leiden LLP [online] Available at: <https://www.balglobal.com/bal-news/brazil-covid-19-immigration-deadlines-resume-after-pandemic-suspension/> [Accessed on 19 March 2021].

Baviskar, B. S. (2001). NGOs and Civil Society in India. Sociological Bulletin, 1(50), 3–15.

BBC News (2020a) Coronavirus: India enters “total lockdown” after spike in cases. [online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52024239> [Accessed on 19 March 2021].

BBC News (2020b) Coronavirus: Anger as migrants sprayed with disinfectant in India. [online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52093220> [Accessed on 19 March 2021].

Bengochea, J., Cabezas, G., Gandini, L., Herrera, G., Luzes, M., Montiel, C., Prieto, V., Vera Espinoza, M. and Zapata, G.P. (in Press, 2021). COVID-19 y población migrante y refugiada. Análisis de las respuestas político-institucionales en ciudades receptoras de seis países de América Latina. In: Vera, F., Adler, V. and Toro, F. (eds.). Inmigrando: Comprender Ciudades en Transición. Buenos Aires: BID. pp 749–782.

Beteille, A. (1999). Citizenship, State and Civil Society. Economic and Political Weekly, 34(36), 2588–2591.

Bhagat, R. B., R.S., R., Sahoo, H., Roy, A. K. and Govil, D. (2020). The COVID-19, Migration and Livelihood in India: Challenges and Policy Issues. Migration Letters, 17(5), 705–718.

Biswas, N. (2006). On Funding and the NGO Sector. Economic and Political Weekly, 41(42), 4406–4411.

Brazil. (2017). Lei Nº 13.445. Brasília: Presidência da República.

Breman, J. (2008). Footloose Labour: Working in India's Informal Economy. Cambridge: Cambridge University Press.

Brum, E. (2021) Pesquisa revela que Bolsonaro executou uma estratégia institucional de propagação do coronavírus. El País [online] Available at <https://brasil.elpais.com/brasil/2021-01-21/pesquisa-revela-que-bolsonaro-executou-uma-estrategia-institucional-de-propagacao-do-virus.html> [Accessed on 19 March 2021].

Campanholo, B.G. (2019). Antes do Refúgio: a história não contada da Caritas Brasileira (1976–1982). M.A Dissertation, Universidade Federal Fluminense.

Castro, F. R. (2020). A Atuação da Sociedade Civil no Processo Brasileiro de Refúgio. Revista Interdisciplinar Da Mobilidade Humana, 28(58), 147–165.

Cavalcanti, L. and de Oliveira, W.F. (2020). Um panorama da imigração e do refúgio no Brasil: Reflexões à guisa de introdução. In: Cavalcanti, L., Oliveira, T. and Macedo, M. (eds.). Imigração e Refúgio no Brasil. Relatório Anual 2020. Série Migrações. Brasília: OBMigra. pp. 8–16.

Chambers, T. (2020). Network, Labour and Migration among Indian Muslim Artisans. London: UCL Press.

Chandhoke, N. (2003) A Critique of the Notion of the Civil Society as the 'Third Space'. In: Tandon, R. and Mohanty, R. Does Civil Society Matter? Governance in Contemporary India. London: Sage Publications. pp. 27–58.

- Chandhoke, N. (2011) Civil Society in India. In: Edwards, M. (eds.). The Oxford Handbook of Civil Society. Oxford: Oxford University Press.
- Chandreashekhar, J. (2018) Ascent of the Third Sector in the Indian Socio-Economic Grid. The CJR Journal [online] Available at: <https://thejournal.in/ascent-third-sector-indian-socio-economic-grid-wide-spectrum-ngos/> [Accessed 4 March 2021].
- Chatterjee. P. (2020) Is India missing COVID-19 deaths? The Lancet, 396(10252), 657.
- Choolayil, A. C. and Putran, L. (2021) Covid-19, the Local and the Global: Lessons from Kerala. South Asia Research, 41(1), 7-21.
- Cornali, F (2021) La pandemia dejó al descubierto la cara más vulnerable de los inmigrantes en Brasil. Agência Anadolu [online] Available at: <https://www.aa.com.tr/es/mundo/la-pandemia-dej%C3%B3-al-descubierto-la-cara-m%C3%A1s-vulnerable-de-los-inmigrantes-en-brasil/1999040> [Accessed on 19 March 2021].
- Couto Soares M.C., Maharajh, R. and Scerri M. (2014). Inequality and Development Challenges: BRICS National Systems of Innovation. London: Routledge.
- Da Silva, S. A. (2013). Brazil, a new Eldorado for Immigrants? The Case of Haitians and the Brazilian Immigration Policy. Urbanities, 3(2), 3–19.
- Dash, S. P. (2001). the State, Civil Society and Democracy: A Note. The Indian Journal of Political Science , 62(2), 241-252.
- De Oliveira, A.T. (2013). Um panorama da Migração Internacional a partir do Censo Demográfico de 2010. Revista Internacional de Mobilidade Humana, 21 (40), 195-210.
- De Oliveira, E. M. M. and Sampaio, C. (2020). Estrangeiro, nunca mais! Migrante como Sujeito de Direito e a Importância do Advocacy pela Nova Lei de Migração Brasileira. São Paulo: Centro de Estudos Migratórios.
- Dey, N. (2020) The role of Civil Society in times of crisis. India Development Review [online] Available at: <https://idronline.org/the-role-of-civil-society-in-times-of-crisis/> [Accessed on 23 Feb. 2021].
- Dhanagare, D. N. (2001). Civil Society, State and Democracy: Contextualizing a Discourse. Sociological Bulletin, 50(2), 167-191.
- EEAS (2020) IOM doctors work in mobile offices in Roraima during the COVID-19 pandemic. [online] Available at https://eeas.europa.eu/delegations/burkina-faso/79541/iom-doctors-work-mobile-offices-roraima-during-covid-19-pandemic_zh-tw [Accessed on 19 March 2021].
- EQUIDEM (2019) Uncertain Journeys – Migration from Kerala to the Arab Gulf. [online] Available at: <https://www.equidemresearch.org/news/uncertain-journeys-migration-from-kerala-to-the-arab-gulf/> [Accessed 7 March 2021].
- ET Government (2020) Civil Society: The Third pillar of strength in fight against coronavirus. [online] Available at: <https://government.economictimes.indiatimes.com/news/governance/civil-society-the-third-pillar-of-strength-in-fight-against-coronavirus/75642349> [Accessed on 10 March 2021].
- Ethiraj, G. (2020) Is Kerala ready for a wave of counter migrants? Indiaspend [online] Available at: <https://www.indiaspend.com/is-kerala-ready-for-a-wave-of-counter-migrants/> [Accessed on 14 Feb. 2021].
- Fernandes, D. (2015). O Brasil e a Migração Internacional no Século XXI – Notas introdutórias. In: do Prado, E. and Coelho, R. (eds.). Migrações e Trabalho. Brasília: Ministério Público do trabalho.
- Fernandes, D. and de Faria, A. V. (2017). O Visto Humanitário como Resposta ao Pedido de Refúgio dos Haitianos. Revista Brasileira de Estudos de População, 34(1), 145–161.
- Fischel, J. H. de A. and Marcolini, A. (2002). A Política Brasileira de Proteção e de Reassentamento de Refugiados: Breves Comentários sobre suas Principais Características. Revista Brasileira de Política, 45(1), 168-176.
- Formici, G. (2019). The Role of the BRICS Group in the International Arena: A Legal Network under Construction. Third World Thematics: A TWQ Journal, 4(6), 459–74.
- Ganguly, S. (2020) India's coronavirus pandemic shines a light on the curse of caste. The Conversation [online]. Available at: <http://theconversation.com/indias-coronavirus-pandemic-shines-a-light-on-the-curse-of-caste-139550>. [Accessed on 19 March 2021].
- Geddes A. and Vera Espinoza, M. (2018). Framing Understandings of International Migration: How Governance Actors Make Sense of Migration in Europe and South America. In: Margheritis, A. (ed.). Shaping Migration between Europe and Latin America. New Approaches and Challenges. London: ILAS publications. pp. 27-50.
- Government of India (2020) Vande Bharat Mission. Phase 1. [online] Available at: <https://www.mea.gov.in/phase-1.html> [Accessed on 18 March 2021].
- Governo do Brasil (2020) Coronavírus: conheça as medidas do Ministério da Justiça e Segurança Pública. [online] Available at: <https://www.gov.br/pt-br/noticias/justica-e-seguranca/2020/03/medidas-do-ministerio-da-justica-e-seguranca-publica-para-combater-o-coronavirus> [Accessed on 19 March 2021].
- Governo do Estado do Amazonas (2020) Programa de Redução de Desperdício arrecada 1.100 quilos de alimentos nas feiras da Manaus Moderna e da Banana. [online] Available at: <http://www.amazonas.am.gov.br/2020/03/programa-de-reducao-de-desperdicio-arrecada-1-100-quilos-de-alimentos-nas-feiras-da-manau-moderna-e-da-banana/> [Accessed on 19 March 2021].
- Governo do Estado de São Paulo (2020) CIC do Imigrante entrega 200 cestas básicas e milhares de máscaras e álcool em gel. [online] Available at: <https://www.saopaulo.sp.gov.br/spnoticias/cic-do-imigrante-entrega-200-cestas-basicas-e-milhares-de-mascaras-e-alcool-em-gel/> [Accessed on 19 March 2021].
- Goyal, P. 2020. The Epidemic Diseases Act, 1897 Needs An Urgent Overhaul. EPW Engage, 55(45).
- Guadagno, L. (2020). Migrants and the COVID-19 Pandemic: An Initial Analysis. Geneva: International Organization for Migration.
- Haokip, T. (2021). From “Chinky” to “Coronavirus”: racism against Northeast Indians during the Covid-19 pandemic. Asian Ethnicity, 22(2), 353–373.
- Huguenev, V. and Godinho, L.F. (2021) COVID-19: ACNUR y sus socios apoyan a refugiados y comunidades de acogida en Brasil. ACNUR [online]. Available at: <https://www.acnur.org/noticias/noticia/2020/3/5e7c54484/covid-19-acnur-y-sus-socios-apoyan-a-refugiados-y-comunidades-de-acogida.html#> [Accessed on 19 March 2021].
- Human Rights Watch (n.d) Kafala System. [online] Available at: <https://www.hrw.org/tag/kafala-system#,%20https://www.cfr.org/backgrounder/what-kafala-system> [Accessed on 3 March 2021]
- IBGE. (2021). Projeção da população. [online] Available at: https://www.ibge.gov.br/apps/populacao/projecao/box_popclock.php [Accessed on 19 March 2021].
- IBSA - Trilateral (2020) About IBSA. [online] Available at: <http://www.ibsa-trilateral.org/> [Accessed on 23 Feb. 2021].
- Inamdar, N. (2020) Coronavirus lockdown: India jobless numbers cross 120 million in April. BBC News [online] Available at: <https://www.bbc.com/news/world-asia-india-52559324> [Accessed on 19 March 2021].
- IOM (2019). IOM Handbook on Protection and Assistance for Migrants Vulnerable to Violence, exploitation and abuse. Geneva: International Organisation for Migration.
- Jarochinski, J. C. Jubilit, L. L. and Velásquez, M. Z. P. (2020). Proteção Humanitária no Brasil e a Nova Lei de Migrações. In: Ramos, A., Vedovato, L. and Baeninger, R. (eds.). Nova Lei da Migração no Brasil: primeiros três anos. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 47–66.
- Jatobá, D. and Martuscelli, P. N. (2018). Brazil as a leader in the Latin American Refugees’ Regime. The Journal of International Relations, 4(1), 1–28.
- Jubilit, L. L. (2006). Refugee Law and Protection in Brazil: a Model in South America? Journal of Refugee Studies, 19(1), 22-44.
- Jubilit, L. L., and Apolinário, S. M. de O. (2008). Refugee Status Determination in Brazil a Tripartite Enterprise. Refuge, 25(2), 29–40.
- Karasapan, O. (2020) Pandemic highlights the vulnerability of migrant workers in the Middle East. Brookings [online] Available at: <https://www.brookings.edu/blog/future-development/2020/09/17/pandemic-highlights-the-vulnerability-of-migrant-workers-in-the-middle-east/> [Accessed on 5 March 2021].
- Keshri, K. and Bhagat, R. B. (2010). Temporary and Seasonal Migration in India . Genus, 3(66), 25-45.
- Kikon, D. (2020) The Long way Home: Tribulations of Migrants from Northeast India. Australia India Institute [online] Available at: <https://www.aii.unimelb.edu.au/blog/covid-19-and-india/the-long-way-home-tribulations-of-migrants-from-northeast-india/> [Accessed on 5 March 2021].
- Khadria, B. (2020) COVID-19: Why are migrant workers so desperate to move out?, Down to Earth [online] Available at <https://www.downtoearth.org.in/blog/urbanisation/covid-19-why-are-the-migrant-workers-so-desperate-to-move-out-70482> [Accessed 15 March 2021].
- Kode, D. and Jacob, M. (2017). India: Democracy Threatened by Growing Attacks on Civil Society. Delhi: CIVICUS.
- Korobkov A. V. (2015). BRICS Members and the Migration Challenges. Tractus Aevorum, (2)2, 190-203.
- Leivon, J., Deb, D. and Agarwala, T. (2020) Behind Northeast’s Covid-19 surge, stranded migrants returning home. The Indian Express [online] Available at: <https://indianexpress.com/article/north-east-india/behind-northeast-covid-19-surge-stranded-migrants-returning-home-6457181/> [Accessed on 19 March 2021].
- Lesser, S. and Wejsa, J. (2018) Migration in Brazil: The Making of a Multicultural Society. Migration Policy Institute [online] Available at: <https://www.migrationpolicy.org/article/migration-brazil-making-multicultural-society> [Accessed on 3 March 2021].
- Lotta, G., Fernandez, M., Ventura, D., Rached H.D., Amorim, M., Barberia, L. G., Moraes De Sousa, T. and Wenham, C. (2020) Who Is Responsible for Brazil’s COVID-19 Catastrophe? LSE Latin America and Caribbean Blog [Blog] Available at: <https://blogs.lse.ac.uk/latamcaribbean/2020/11/13/who-is-responsible-for-brazils-covid-19-catastrophe/> [Accessed on 24 Feb. 2021].
- Machado, I. J. de R. (2020). Securitization (Re)Turn: Analysis of the New Brazilian Migration Laws (2016-2019). Middle Atlantic Review of Latin American Studies, 4(2), 213-214.
- Mamed, L. H. (2016). Haitianos na Amazônia: a Morfologia da Imigração Haitiana pelo Acre e o Horizonte de Inserção Precarizada no Brasil. Ruris, 10(1), 73–11.
- Maraa, Media and Arts Collective (2020). Behind the Metro Pillars. [online] Available at: https://www.maraa.in/wp-content/uploads/2020/04/behind-the-metro-pillars_final.pdf [Accessed on 24 Feb. 2021].
- Margolis, M. (2013). Goodbye, Brazil: emigrantes brasileiros no mundo. São Paulo: Editora Contexto.
- Martuscelli, P. N. (2020). Fighting for Family Reunification: the Congolese Experience in São Paulo, Brazil. Journal of Refugee Studies, 0(00), 1–24.
- Mehrotra, S. (2019). Informal Employment Trends in the Indian Economy: Persistent Informality, but growing positive development. Geneva: Employment Policy Department, ILO.

Milesi, R. and Coury, P. (2018). Acolhida, Proteção e Integração de Venezuelanos no Brasil : a Atuação do Instituto Migrações e Direitos Humanos. In: Jarochinski, J. C. S. and Baeninger, R. Migrações Venezuelanas. Campinas: Núcleo de Estudos de População Elza Berquó. pp. 72–77.

Milesi, R., Coury, P. and Rovey, J. (2018). Migração Venezuelana ao Brasil: discurso político e xenofobia no contexto atual. *Aedos*, 10(22), 53–70.

Milesi, R. and de Andrade, W. C. (2017). Fazendo Memória do Processo de Construção da Lei de Refugiados no Brasil. *Refúgio, Migrações e Cidadania*, 12(12), 47-75.

Ministério da Justiça (2021) Comitês Estaduais de Enfrentamento ao Tráfico de Pessoas. [online] Available at <https://www.novo.justica.gov.br/sua-protecao-2/trafico-de-pessoas/redes-de-enfrentamento/comites-1> [Accessed on 24 March 2021].

Mohan, S. (2002). Role and Relevance of Civil Society Organizations. *The Indian Journal of Political Science*, 63(2/3), 193-211.

Mohanty, S. (2020). From communal violence to lockdown: hunger emergency responses by civil society networks in Delhi. *Oxfam [blog]* Available at: <https://oxfamblogs.org/fp2p/from-communal-violence-to-lockdown-hunger-emergency-responses-by-civil-society-networks-in-delhi/> [Accessed on 23 Feb. 2021].

Moreira, J. B. (2010). Redemocratização e direitos humanos: a política para refugiados no Brasil. *Revista Brasileira de Política Internacional*, 53(1), 111–129.

Moulin C. and Magalhaes, B. 2020. Operation shelter as humanitarian infrastructure: material and normative renderings of Venezuelan migration in Brazil. *Citizenship Studies*, 24 (5), 642-662.

Moulin, C. (2012). Ungrateful subjects? Refugee protests and the logic of gratitude. In: Nyers, P. and Rygiel, K. (eds.). *Citizenship, Migrant Activism and the Politics of Movement*. London: Routledge. pp. 54-72.

Murshid, N. (2016). Assam and the Foreigner Within. *Asian Survey*, 56(3), 581-604.

Nair, P. (2020) India's internal migrants are citizens too: the Government Must Protect them, *The Conversation*, June 15th 2020 [online] Available at: <https://theconversation.com/indias-internal-migrants-are-citizens-too-the-government-must-protect-them-140295> [Accessed on 1 April 2021].

Nair, P. and Vera Espinoza, M. (2021) Migration, Pandemic and Responses from the Third Sector. *Global Policy Institute [blog]* Available at: <https://www.qmul.ac.uk/gpi/news-and-events/news/migration-pandemic-and-responses-from-the-third-sector--lessons-from-brazil-and-india.html> [Accessed on 21 February 2021].

OIM (2020) A pesar de la pandemia, la reubicación y asistencia brindada a venezolanos en Brasil no se detiene. *SPIC, Brasil* [online] Available at: <https://www.iom.int/es/news/pesar-de-la-pandemia-la-reubicacion-y-asistencia-brindada-venezolanos-en-brasil-no-se-detiene> [Accessed on 19 March 2021].

Oommen, T. K. (2001). Civil Society: Religion, Caste and Language. *Sociological Bulletin*, 50(2), 219-235.

PAHO (2017) Brazil. [online] Available at: <https://www.paho.org/salud-en-las-americas-2017/?p=4246> [Accessed on 19 March 2021].

Pannunzio, E. (2013). Pautas para o aperfeiçoamento do fomento público às OSCs no Brasil. In: Mendonça, P. M. E., Alves, M.A. and Nogueira, F. do A. (eds.). *Arquitetura Institucional de Apoio às Organizações da Sociedade Civil no Brasil*. São Paulo: FGV. pp 167-179.

Patel, C. (2020) COVID-19: The Hidden Majority in India's Migration Crisis. *Chatham House* [online] Available at: <https://www.chathamhouse.org/2020/07/covid-19-hidden-majority-indias-migration-crisis> [Accessed on: 19 March 2021].

Pethiyagoda, K. (2017) Supporting Indian workers in the Gulf: What Delhi can do. *Brookings* [online] Available at: <https://www.brookings.edu/research/supporting-indian-workers-in-the-gulf-what-delhi-can-do/> [Accessed on 9 March 2021].

Prefeitura de São Paulo (2021) Conselho Municipal de Imigrantes. [online] Available at: https://www.prefeitura.sp.gov.br/cidade/secretarias/direitos_humanos/imigrantes_e_trabalho_decente/conselho_municipal_de_imigrantes/index.php [Accessed on 30 March 2021].

Press Information Bureau of India (2020) PM addresses nation on combating COVID-19. Prime Minister's office [online] Available at: <https://pib.gov.in/Pressreleaseshare.aspx?PRID=1607248> [Accessed on 18 March 2021].

PRIA and VANI. (2020). *Response of Indian Civil Society Towards COVID-19*. Delhi: PRIA and VANI.

Rajan, I., Sivakumar, P. and Srinivasan, A. (2020). The COVID-19 Pandemic and Internal Labour Migration in India: A Crisis of Mobility. *The Indian Journal of Labour Economics*, 63(4), 1021–1039.

Ramachandran, B. (2020) Where India's government has failed in the pandemic its people have stepped in. *The Guardian* [online] Available at: <https://www.theguardian.com/global-development/commentisfree/2020/may/05/where-indias-government-has-failed-in-the-pandemic-its-people-have-stepped-in-coronavirus> [Accessed on 23 Feb. 2021].

Rao, N., Narain, N., Chakraborty, S., Bhanjdeo, A. and Pattnaik, A. (2020). Destinations Matter: Social Policy and Migrant Workers in the Times of Covid. *The European Journal of Development Research*, 32(5), 1639–1661.

Rastogi, N. and Wu, A. M. (2020) Indian civil society sidelined in a pandemic. *East Asia Forum* [online] Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2020/10/30/indian-civil-society-sidelined-in-a-pandemic/> [Accessed on 14 Feb. 2021].

Rawat, M. (2020) In 13 states NGOs fed more people that government during coronavirus lockdown. *India Today* [online] Available at: <https://www.indiatoday.in/india/story/in-13-states-ngos-fed-more-people-than-govt-during-coronavirus-lockdown-1665111-2020-04-09> [Accessed on 14 Feb. 2021].

Reid, D. (2020) India confirms its first coronavirus case. *CNBC* [online] Available at: <https://www.cnbc.com/2020/01/30/india-confirms-first-case-of-the-coronavirus.html> [Accessed on 5 March 2021].

Rocha, E. (2008). A Constituição Cidadã e a institucionalização dos espaços de participação social: avanços e desafios. In: Vaz, F. T., Musse, J. S. and dos Santos, R. F. (eds.). *20 Anos da Constituição Cidadã*. Brasília: Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil. pp. 131–148.

Rustagi N & Wu, A.M. (2020) Indian Civil Society sidelined in a pandemic. *East Asia Forum* [online] Available at: <https://www.eastasiaforum.org/2020/10/30/indian-civil-society-sidelined-in-a-pandemic/> [Accessed 3 March 2021].

Sahoo, A. K. (2015). *Diaspora, Development and Distress: Indians in the Persian Gulf*. Jaipur: Rawat Publications.

Sahoo, S. (2013). *Civil Society and Democratization in India*. London: Routledge.

Salle, V. S. K. (2020) COVID-19 crisis: Uncertainty ahead for migrant workers. *EastMojo* [online] Available at: <https://www.eastmojo.com/news/2020/05/31/covid-19-crisis-uncertainty-ahead-for-migrant-workers/> [Accessed on 5 March 2021].

Shah, G. (2019). *Democracy, Civil Society and Governance*. New Delhi: Sage Publications.

Sharma, I. (2020) COVID-19 and Political Unrest in Northeast India. *ACLEDDATA* [online] Available at: <https://acleddata.com/2020/10/26/covid-19-and-political-unrest-in-northeast-india/> [Accessed on 19 March 2021].

Singha, K. (2018). Migration, Ethnicity-based Movements and State's Response: A Study of Assam. *International Studies*, 55(1), 41-60.

Sircar, J. (2020) A Long Look at Exactly Why and How India Failed Its Migrant Workers. *The Wire* [Blog] Available at: <https://thewire.in/labour/lockdown-migrant-workers-policy-analysis> [Accessed on 24 Feb. 2021].

Sitlhou, M. (2020) Coronavirus in the UAE: Migrant workers from northeast India desperate to get home. *Middle East Eye* [online] Available at: <http://www.middleeasteye.net/fr/node/175451> [Accessed on 19 March 2021].

Srivastava, S.S. and Tandon, R. (2005). How Large is India's Non-Profit Sector? *Economic and Political Weekly*, 40 (19), 1948-1952.

Statista Research Department (2020) Internal migrant population share in India 2001-2011 by type. [online] Available at: <https://www.statista.com/statistics/1111480/india-internal-migrant-population-share/#statisticContainer> [Accessed on 9 March 2021].

Suresh R. and James J, R. (2020). Migrant Workers at Crossroads-The Covid-19 Pandemic and the Migrant Experience in India. *Soc Work Public Health*, 35(7), 633-643.

The Hindu (2020) COVID-19 lockdown: Migrant workers from Northeast feeling insecure to return to workplace, says AIMO. *The hindu* [online] Available at: <https://www.thehindu.com/news/national/other-states/covid-19-lockdown-migrant-workers-from-northeast-feeling-insecure-to-return-to-workplace-says-aimo/article31299595.ece> [Accessed on 5 March 2021].

The Lancet (2020) COVID-19 in India: the dangers of false optimism. *The Lancet* [online]. Available at: [https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736\(20\)32001-8/fulltext](https://www.thelancet.com/journals/lancet/article/PIIS0140-6736(20)32001-8/fulltext) [Accessed on 5 March 2021].

The Wire (2020) Centre Says It Has No Data on How Many Migrant Workers Died in the COVID-19 Lockdown. *The Wire* [online] Available at: <https://thewire.in/rights/centre-lok-sabha-migrant-worker-death-data> [Accessed on 19 March 2021].

Turner, C. (2018). *India Moving: A History of Migration*. New Delhi: Penguin.

UNDESA. (2020). *World Social Report 2020: Inequality in a Rapidly Changing World*. New York: United Nations

UNHCR (2017) Migrants in Vulnerable Situations – UNHCR perspective. [online] Available at: <https://www.refworld.org/docid/596787174.html> [Accessed on 22 Feb. 2021].

Upadhyay, V. (2008). Ethnic Polarisation And Human Security: The Case Of Migrants In Northeast India. *World Affairs: The Journal of International Issues*, 12(1), 152-174.

Vera Espinoza, M., Prieto, V., Zapata, G., Gandini, L., Herrera, G., Reguera, A., Lopez, S., Zamora, C., Montiel, C., Cabezas, G. and Paella, I. (forthcoming). *Migrants and Refugees in Latin America during COVID-19: An Inclusion/Exclusion Spectrum of Social Protection*. *Comparative Migration Studies*.

Vera Espinoza, M., Zapata, G. Gandini, L. (2020) Mobility in Immobility: Latin American Migrants Trapped amid COVID-19. *Open Democracy* [Blog] Available at: <https://www.opendemocracy.net/en/democraciaabierto/mobility-immobility-latin-american-migrants-trapped-amid-covid-19/> [Accessed on 19 Feb. 2021].

Vera Espinoza, M. (2018). *The Politics of Resettlement: Expectations and Unfulfilled Promises in Chile and Brazil*. In: Garnier, A., Jubilit, L. L. and Sandvik, K. B. (eds.). *Refugee Resettlement*. Oxford: Berghahn Books. pp. 223-243.

Vera Espinoza, M., (2018) The Limits and Opportunities of Regional Solidarity: Exploring Refugee Resettlement in Brazil and Chile. *Global Policy*, 9(1), 85-94.

Véran, J. F., Noal, D. and Fainstat, T. (2014). Nem Refugiados, nem Migrantes: A Chegada dos Haitianos à Cidade de Tabatinga (Amazonas). *Dados*, 57(4), 1007–1041.

Vinod, M. J. (2006). The Changing Dimensions of Civil Society in the Twenty-First Century: Theory Versus Reality. *The Indian Journal of Political Science*, 67(4), 783-792.

Waltrick, A. (2019) Letter to António Guterres. [online] Available: https://ungc-production.s3.us-west-2.amazonaws.com/commitment_letters/137611/original/Global_Pact_-_SPIC_Brasil.pdf?1570827115 [Accessed on 19 March 2021].

Weiner, M. (1983). The Political Demography of Assam's Anti-Immigrant Movement. *Population and Development Review*, 9(2), 279-292.

Wejsa, S. and Lesser, J. (2018) Migration in Brazil: The Making of a Multicultural Society. Migration Policy Institute [online] Available at: <https://www.migrationpolicy.org/article/migration-brazil-making-multicultural-society> [Accessed on 19 March 2021].

WHO (2021) Global Brazil, Brazil: WHO Coronavirus Disease (COVID-19) Dashboard. [online] Available at: <https://covid19.who.int/region/amro/country/br> [Accessed on 19 March 2021].

Wordometer (2021) India Coronavirus: 11,514,331 Cases and 159,405 Deaths. [online] Available at: <https://www.worldometers.info/coronavirus/country/india/> [Accessed on 19 March 2021].

World Bank (2020) COVID-19 Crisis Through a Migration Lens. [online] Available at: <https://openknowledge.worldbank.org/handle/10986/33634> [Accessed on 21 Feb. 2021].

Yasir, S. (2020) India's Covid-19 Death Toll Passes 100,000. *The New York Times* [online] Available at: <https://www.nytimes.com/2020/10/03/world/asia/india-coronavirus-deaths.html> [Accessed on 5 March 2021].

Youngs, E. (2020). Introduction. In: Youngs, E. (ed.). *Global Civil Society in the Shadow of Coronavirus*. Washington: Carnegie Endowment for International Peace.

Zapata, G. P. and Tapia, V. (forthcoming). Progressive Legislation but Lukewarm Policies: The Brazilian Response to Venezuelan Displacement. *International Migration*.

Zapata, G. P. and Fazito, D. (2018). Comentário: o significado da nova lei de migração 13.445/17 no contexto histórico da mobilidade humana no Brasil. *Revista Da Universidade Federal de Minas Gerais*, 25(1 e 2), 224–237.

Zapata, G. P. and Prieto Rosas, V. (2020). Structural and Contingent Inequalities: The Impact of COVID 19 on Migrant and Refugee Populations in South America. *Bulletin of Latin American Research*, 39 (1), 16–22.

Zortea, G. (2017). Benefício de Prestação Continuada – BPC em Favor de Imigrantes Residentes no País. In: Jarochinski, J. C. S. and Baeninger, R. (eds.). *Refúgio, Migrações e Cidadania*. São Paulo: Instituto Migrações e Direitos Humanos. pp. 47–74

Prof Parvati Nair,
School of Languages, Linguistics and Film
email: p.nair@qmul.ac.uk

Dra Marcia Vera Espinoza,
School of Geography
email: m.vera-espinoza@qmul.ac.uk

 @qmul

 @qmul

 officialqmul

qmul.ac.uk/gpi
